

00000035

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

03 de diciembre de 2008

Señor Diputado
Aristides Crespo Villegas
Presidente de la Junta Directiva
Congreso de la República
Su Despacho

Honorable Señor Presidente:

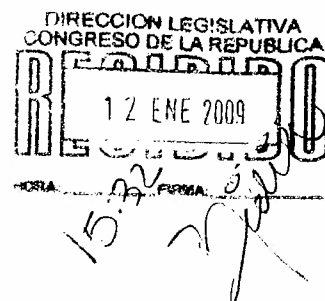
Con atento saludo nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir el **Dictamen Favorable número 12-2008**, que la Comisión de Economía y Comercio Exterior emitió con fecha de hoy a la iniciativa identificada con número de registro 3472, "**Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura**", con el propósito de que se conozca y siga el trámite correspondiente para su discusión y aprobación por el Honorable Pleno del Congreso de la República.

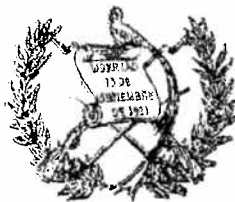
Agradeciendo su atención, me suscribo con las muestras de consideración y alta estima.


Mariano Rayo Muñoz
Presidente



/mjb
c.c. archivo





00000036

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

DICTAMEN 12-2008

De la Comisión de Economía y Comercio Exterior a la Iniciativa de Ley **3472**
ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMIA

HONORABLE PLENO

Con fecha 31 de mayo del 2006, el Honorable Pleno, conoció la iniciativa de Ley propuesta por el Organismo Ejecutivo, en la cual se propone aprobar la Iniciativa **3472**, Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura, la cual fue remitida a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su estudio y dictamen.

ANTECEDENTES

*"Más que un conjunto de obras civiles, la infraestructura es el tejido físico y las venas económicas sobre las cuales se construye el desarrollo de una nación. Los principales nexos entre infraestructura y desarrollo se enfocan en sus relaciones con productividad, competitividad, crecimiento económico, inversión privada y reducción de la pobreza. Por eso, las políticas y acciones de las naciones en el sector, tradicionalmente establecen retos con aspectos como inversiones en infraestructura, vs. PIB, reducción en costos de producción vía mejoras en la infraestructura física y crecimiento del empleo a través de las oportunidades generadas por nuevos proyectos de infraestructura. Las estrategias para el desarrollo de la infraestructura siempre se han caracterizado por ser dinamizadoras de la inversión pública y de la privada, así como de la movilidad social."*¹

El crecimiento poblacional, económico y la competitividad de país requieren de mayores inversiones en la ampliación de la infraestructura ya existente, especialmente la dispuesta para los sectores productivos. Por lo anterior, es necesario aumentar los recursos y los proyectos de inversión pública y privada, para acelerar el crecimiento de la economía y hacer un mejor uso de los recursos públicos.

En tal sentido, la participación pública-privada en inversiones denominada "*Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -APD-*" en esta ley, permite potenciar los recursos escasos de inversión destinados a actividades productivas, las alianzas de este tipo desarrollan un nuevo esquema de inversión donde se unen los sectores público y privado, logrando mantener condiciones de estabilidad, propiciando el crecimiento económico y la generación de empleo.

A nivel mundial, este esquema -APD- ha cobrado popularidad, ya que permiten a los gobiernos nacionales y locales:

¹ Torres-García, D. (2007). Infrastructure forecast modeling II. Policy planning via structural analysis and balanced scorecard. Archivos de Economía. No. 331.



00000037

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- a) Mejorar la administración de los fondos públicos.
- b) Reducir el déficit en infraestructura pública.
- c) Establecer una relación estrecha entre el sector privado y el público, basada en el entendimiento, la confianza y una clara asignación de riesgos.
- d) Ofrecer una mejor calidad de servicios públicos en el mediano y largo plazo.
- e) Generar mayor rentabilidad y valor del dinero invertido.
- f) Procurar transparencia e innovación de los servicios.
- g) Garantiza la coordinación interinstitucional y corresponsabilidad en la ejecución de proyectos.
- h) Ofrecer certeza jurídica.
- i) Determinar previamente la necesidad y la viabilidad del proyecto.
- j) Informar a la sociedad e inversores potenciales y con contratos sobre los estudios de mercado y las necesidades de obras y servicios.
- k) Evaluar con auditorías internas y externas el desempeño de los proyectos.
- l) Garantizar eficiencia, efectividad y viabilidad financiera de los proyectos.

Al sector privado:

- a) Ampliar el mercado.
- b) Absorber el riesgo comercial.
- c) Contar con flujos constantes y predecibles.
- d) Incentivar la ejecución de proyectos eficientes.
- e) Posicionar en la región una empresa eficiente con especialidad en Participación Público-Privada (P3).

Al usuario:

- a) Mejorar la cantidad y calidad de obras y servicios.
- b) Acceder a la infraestructura en el corto plazo para elevar la productividad.
- c) Garantizar el retorno de sus impuestos con obras y servicios de calidad.
- d) Accesar a información pública para auditar sus impuestos y para conocer los beneficios de los proyectos.
- e) Permitir una efectiva rendición de cuentas por parte de sus funcionarios.

Las Alianzas para el Desarrollo -APD-, tienen la finalidad de proveer servicios que tradicionalmente son suministrados por el sector público, en exclusivo. Los riesgos del proyecto se distribuyen entre las partes en forma equitativa, con el objetivo de reducir los costos. Se cuentan con garantías y compromisos en ambos lados, este esquema busca no solo el financiamiento del sector privado, sino también su capacidad de gestión a largo plazo. Existe una fusión de capacidades para ampliar la cobertura y calidad de los



00000039

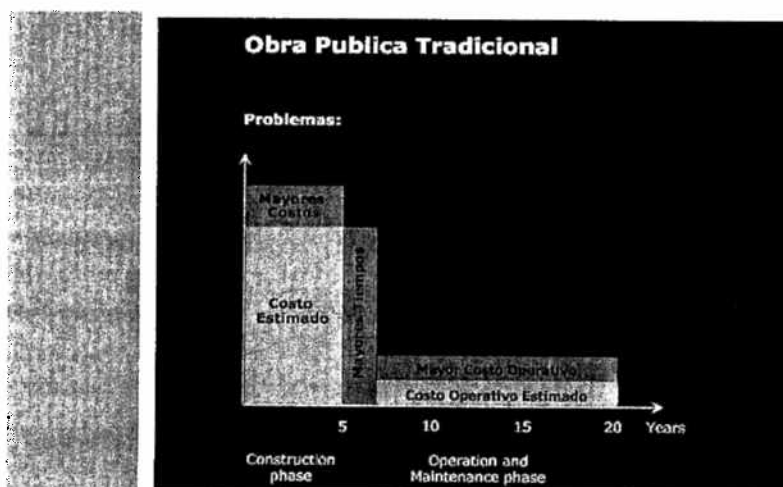
Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

servicios públicos, por encima de las capacidades del sector público, para el efecto es necesario generar un sistema de políticas, instituciones y leyes que apoyen el desempeño y el éxito de dichas alianzas.

Las alianzas público privadas para el desarrollo -APD, atraen inversión nacional y extranjera, para ello se debe contar con una cartera de proyectos integrados que promuevan la competitividad de país. Las alianzas público privadas, generan una coordinación interinstitucional entre el gobierno central, gobiernos locales, el Organismo Legislativo, para su aplicabilidad y transparencia.

Esquema tradicional de ejecución de obras públicas según esquema presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- e IDC:

Public Private Partnerships



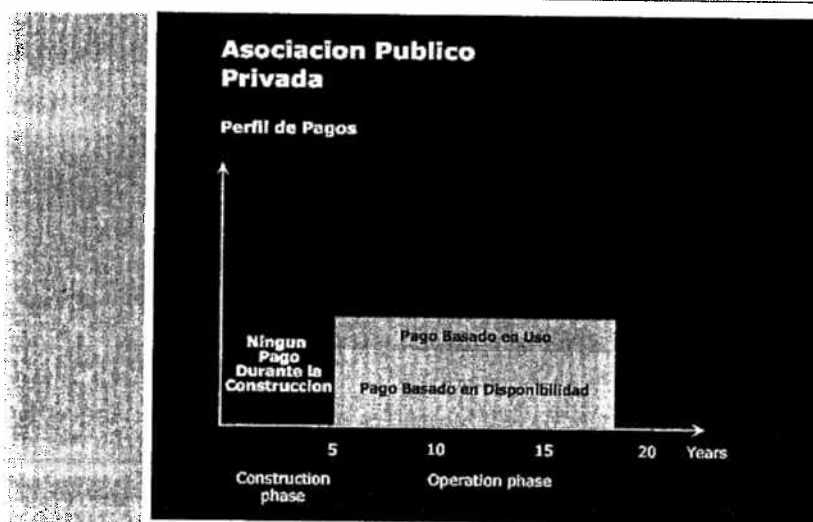


00000039

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

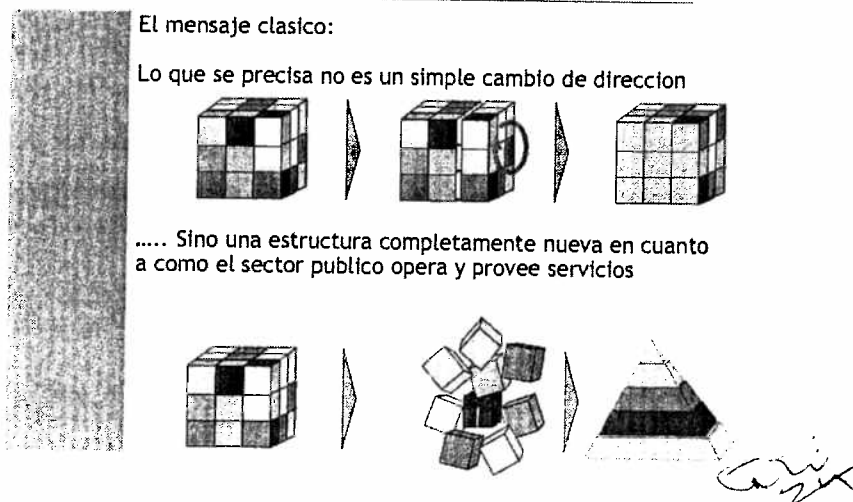
Esquema de participación Público Privada o alianzas para el Desarrollo -APD-

Public Private Partnerships



Cambio de forma de trabajo con las alianzas público privadas para el desarrollo -APD-

Public Private Partnerships



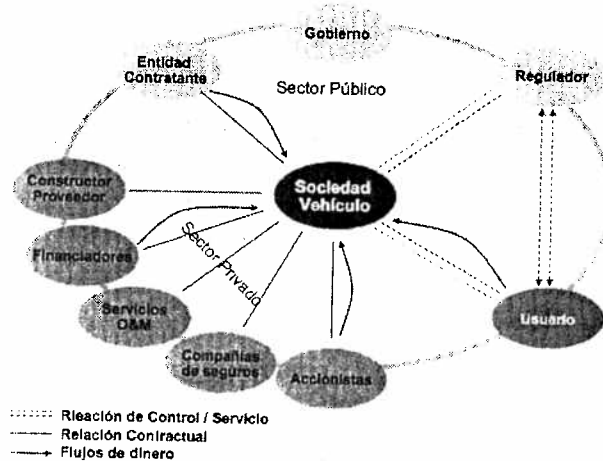


00000040

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

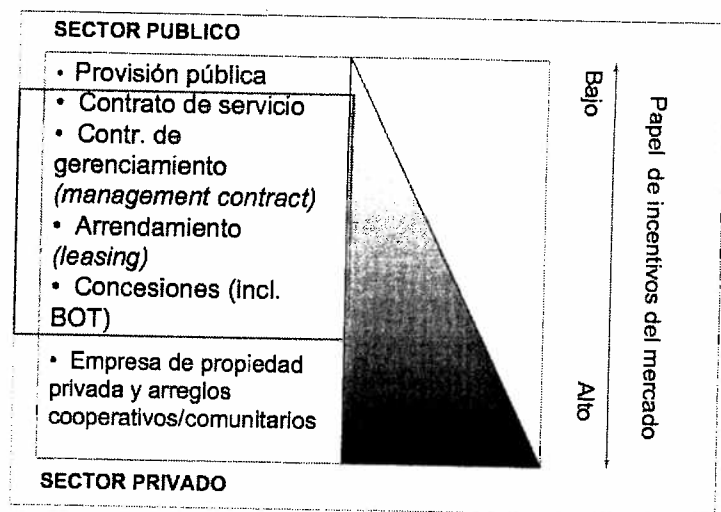
Esquema de Participación Público-Privada en las Alianzas para el Desarrollo -APD-

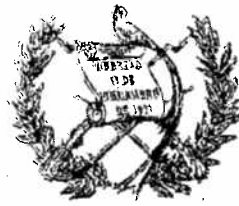
Quienes Participan



Diversos tipos de participación en Alianzas Público-Privada -APD-

¿QUE TIPOS DE APP's EXISTEN?

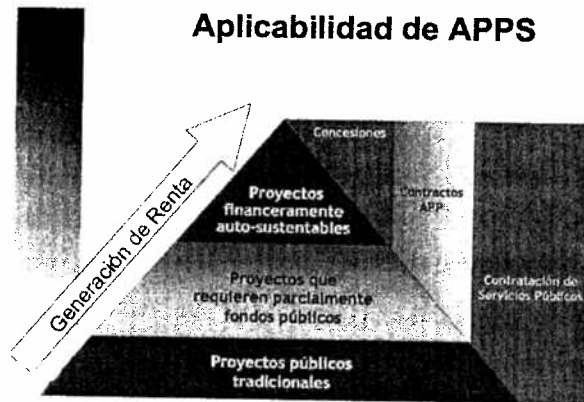




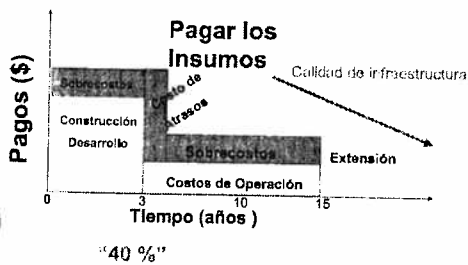
00000041

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Esquema de aplicación de recursos en participación Público-Privada -APD-

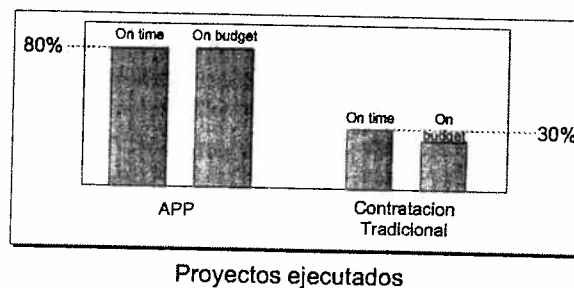


Mecanismo tradicional de compra
Poco "Valor por dinero"



Ahorros adicionales

Entrega del proyecto sin atrasos ni
sobrecostos





00000042

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Distribución de responsabilidades y riesgos en varias opciones de participación pública-privada

Responsabilidades y riesgos	Contrato de servicio	Contr. de gerenciamiento	Arrendamiento	Concesiones (incl. BOT)	Emp. privada y cooperativas
Propiedad de activos	Estatat	Estatat o mixto	Estatat o mixto	Estatat o mixto	Sect. Privado
Planeamiento y regulación de inversiones	Agencia matriz u otra aut. pública	Agencia matriz u otra aut. pública	Agencia matriz u otra aut. pública	Estatat, negociado con concesionario	Ninguno o agencia estatal
Financiamiento de capital	Sect. Público	Sect. Público	Sect. Público	Sect. Privado	Sect. Privado
Cptal de trabajo	Sect. Público	Sect. Público	Sect. Privado	Sect. Privado	Sect. Privado
Ejecución de obras	S. Privado seg. se especifique	Sect. Público	Sect. Público	Sect. Privado	Sect. Privado
Operación y mantenimiento	S. Privado seg. se especifique	Sect. Privado	Sect. Privado	Sect. Privado	Sect. Privado
Autoridad gerencial	Sect. Público	Sect. Privado	Sect. Privado	Sect. Privado	Sect. Privado
Riesgo comercial (demanda)	Sect. Público	Principalmente público	Sect. Privado	Sect. Privado	Sect. Privado
Fundamento p. compensación	Servicios prestados	Serv. prestados y resultados	Resultados	Resultdos	Determinado privadamente
Duración	Menor a 5 años	3-5 años	5-10 años	10-30 años	Indefinida

En las sociedades actuales, los distintos sectores no trabajan solos, por el contrario, crean lazos y redes de trabajo conjunto. Una -APD- es una alianza, una asociación, donde el sector público y el privado se unen para el desarrollo de un objetivo en armonía de intereses entre el sector privado y el Estado.

La distribución de riesgos de las -APD- se determinan en el contrato, los riegos de desempeño en los proyectos son asumidos por el sector privado.

Sin duda, las motivaciones son diferentes, ya que en el sector privado es generar ganancias y el compromiso del Gobierno es generar el bienestar. En un esquema de -APD-, es necesario armonizar los intereses de los dos sectores. Por lo que esta Ley proporciona competencia y certeza jurídica, ya que los dos sectores trabajan como socios.

Los sistemas de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica son un mecanismo eficiente para abordar los desafíos dentro del ámbito de los servicios públicos, sólo cuando se producen en el marco de un sistema competitivo de participación del sector privado, en forma transparente; con recuperación efectiva de costos de parte de los usuarios e incrementos de los niveles de eficiencia en la provisión de los servicios; y cuando generan un impacto en el crecimiento de la economía y de la equidad social, al liberar efectivamente recursos presentes y futuros del Estado para inversión social.



00000043

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Para poder poner a consideración del Honorable Congreso de la República una Iniciativa de Ley correcta y oportuna, se han revisado y analizado las mejores prácticas internacionales, incluyendo los principios desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OECD- (adjunto en Anexo A) y se han traducido en uno de los marcos jurídicos más modernos del mundo de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que garantizará a la sociedad guatemalteca la obtención de los beneficios efectivos derivados de la generación de un Sistema Nacional de Alianzas para el Desarrollo.

Así, sin perder sus potestades públicas, autoridad y rectoría, el Estado podrá aprovechar las habilidades, conocimiento y experiencia del sector privado para desarrollar proyectos de inversión en infraestructura y servicios que dinamicen la economía nacional y contribuyan a su desarrollo económico.

Por ello, dentro de los esquemas de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, deben existir principios, normas jurídicas e instituciones que permitan una interacción positiva entre el sector público y privado, que faciliten la integración en armonía; pero con la debida fiscalización, de las habilidades y capacidades de ambos sectores para realizar proyectos que difícilmente se podrían desarrollar por la vía de contratos administrativos tradicionales.

Esta Iniciativa de Ley, desarrolla un marco regulador que establece reglas claras para esa interacción positiva, permitiéndole al Estado incorporar nuevas formas de gestión pública que incrementen, de manera significativa, la inversión en infraestructura en el país y la calidad de los servicios públicos.

Contexto Internacional

La conceptualización de Alianzas Público-Privadas nació en el Reino Unido en la última parte de la década de los años setenta, ha sido utilizada con éxito, en la actualidad, en diversos Estados tales como Perú, Panamá, Chile, México, Brasil, Corea y España, entre otros. Estos países han desarrollado un adecuado marco jurídico, como el que la Iniciativa de Ley propone, que ha permitido la adecuada interacción del sector privado en algunas actividades que anteriormente se consideraban como propias y exclusivas del Estado, sin que este último se vea debilitado en su labor y papel de rector de las actividades y funciones sociales, pudiendo así atender de primera mano las principales necesidades sociales.

Según las experiencias latinoamericanas registradas en el campo de las Alianzas público privadas, de 1985 hasta 2000 ha habido mil procesos de esta naturaleza, y en éstas un 60% del total fueron exitosas y el otro 40% pasaron por un proceso de renegociación. De éstas, 28% se hicieron por Acuerdo Gubernativo y 17% fueron el marco general de participación público privada. Los países que cuentan con una ley general, presentan un marco institucional mucho más sólido para las APD. Otra interesante observación es que de este 40% que se renegoció, un 65% ocurrió en lugares donde no existía un órgano regulador.

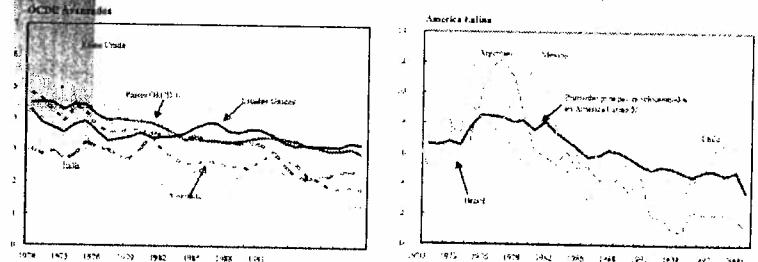


00000044

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Estos países han logrado generar un enfoque de gestión de la infraestructura para el crecimiento, basados en un esquema de cobros por servicios, cobros efectuados a aquellos usuarios que más se benefician por el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y que tienen capacidad de pago. Los recursos adicionales así obtenidos, permiten al Estado la recuperación de un porcentaje de los costos de inversión, de parte de los propios usuarios beneficiados; al mismo tiempo que el sistema genera un uso más eficiente y eficaz de los servicios y permite atraer inversión y capacidad de gestión privada. en el caso de los usuarios sin capacidad de pago, el Estado cumple su función de proveer el servicio, cumpliendo la función constitucional de subsidiariedad.

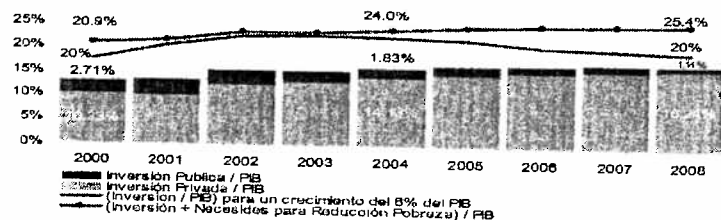
**Tendencias en la Inversión Pública en
Países Avanzados de la OCDE y Algunos
Países de América Latina, 1970-2000**



Situación Actual de Guatemala

Las necesidades de inversión del país:
Para erradicar la pobreza se necesitaría una inversión
equivalente a un 20-25% del PIB anual

**Inversión pública y privada como porcentaje del PIB
2000-2008**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con datos del BANGUAT y cálculos propios. El cálculo de necesidades para la reducción de pobreza en términos del PIB se computó para 2002 y se extrajo del documento "La pobreza en Guatemala" ese mismo porcentaje se usó a todos los años. Cálculos propios basados en la brecha de pobreza, tal que el porcentaje debería ser de 5.10% (precios constantes).



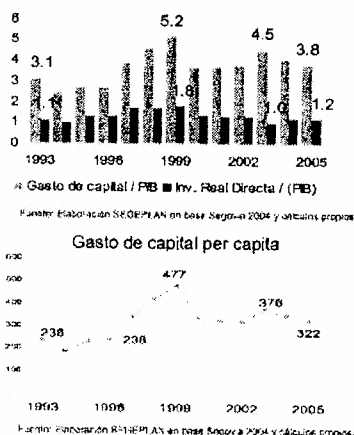
00000045

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

La inversión total (pública y privada) en
infraestructura ha tendido a ser baja y cíclica

	Gasto en capital (público) / Gasto total	Gasto de Capital (público) per capita como porcentaje del PIB	Gasto de Capital (público) per capita
1.993	29.0	3.1	238.0
1.994	25.8	2.4	187.0
1.995	26.7	2.7	231.0
1.996	25.7	2.7	238.0
1.997	38.4	3.9	340.0
1.998	36.8	4.6	420.0
1.999	37.7	5.2	477.0
2.000	28.9	3.7	335.0
2.001	28.7	3.7	322.0
2.002	30.6	3.8	321.0
2.003	33.6	4.5	376.0
2.004	35.4	4.1	348.7
2.005	34.3	3.8	322.2

Fuente: P. Acemiano y SEGEPLAN en base Segovia 2004 y cálculos propios.



Transporte

Guatemala requiere para contar con niveles más competitivos, realizar inversiones en infraestructura, tomando en cuenta que solamente en la red vial existe un déficit de Q5.5 millardos, de acuerdo a datos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como mejorar la calidad del servicio. Es decir, la densidad por carreteras es muy baja, se cuenta con 100kms de carretera por cada 1,000 Km.; en comparación con Centroamérica que refleja 500kms de carretera por cada 1,000 Km. Adicionalmente, las estadísticas reflejan que Guatemala cuenta con 1km de carretera por cada 1,000 habitantes, comparada con Latinoamérica que cuenta con 6 Km. por cada 1000 habitantes.

El 80% de los caminos rurales requiere rehabilitación. El parque vehicular se encuentra en constante crecimiento, mostrándose que la motorización crece al doble del PIB 5.7%

Puertos y Aeropuertos

Guatemala cuenta con el segundo mayor sistema de puertos en Centroamérica. Según datos de SEGEPLAN, el Puerto Santo Tomás de Castilla moviliza el 43% del tráfico de contenedores.

El rating del World Economic Forum, indica que los puertos en Guatemala son ineficientes, y otorga un valor de 2.8, bajo en relación al promedio de los países de igual ingreso, cuyo valor es de 3.4. Además, una encuesta realizada por este foro indica que la calidad de los puertos es de las peores en la región centroamericana, encontrándose en la posición 74 por el desarrollo de Infraestructura (tanto de transportes como de comunicaciones), mientras que califica a Chile en el lugar 35, Panamá en el 46,



00000046

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Jamaica en el 53, El Salvador en el lugar 54, Uruguay en la posición 58, México en el lugar 64, Costa Rica en el lugar 73...

El índice de infraestructura evaluó distintos aspectos, en los cuales el transporte tiene un papel preponderante:

- ✓ Calidad de las vías de comunicación.
- ✓ Calidad de infraestructura de ferrocarriles.
- ✓ Calidad de infraestructura portuaria.
- ✓ Calidad de infraestructura aérea.
- ✓ Calidad de la red eléctrica.
- ✓ Calidad de la red de telecomunicaciones.

Es imprescindible considerar que las inversiones en infraestructura por medio de alianzas para el desarrollo -APD- tendrá un alto impacto en la reducción de las brechas sociales, económicas y de competitividad a largo plazo.

Por lo anterior. Guatemala, a través del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- e Invest In Guatemala, , han emprendido un ambicioso esfuerzo que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de la economía y ayudar en la reducción de la pobreza y han establecido la Agenda Nacional de Competitividad 2005 - 2015, la cual pretende posicionar a Guatemala en 4 áreas principales:

- ➔ Destino turístico, ecológico y cultural
- ➔ Plataforma exportadora agrícola, industrial y forestal
- ➔ Centro Logístico y de Servicios
- ➔ Centro Energético y Minero

Con el fin de poder cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda, se hace patente la necesidad de contar con un Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte, que incluye a los los diferentes modos de transporte (Portuario, Logístico, Aeroportuario, Ferroviario y Vial), identificando los proyectos estratégicos para mejorar el acceso a los servicios y de los productos al mercado local e internacional.

Guatemala como destino Turístico y Cultural: El 63% del total de turistas arriban vía terrestre requiriendo seguridad y comodidad en los desplazamientos, con ello se incrementa la actividad turística local y permitirá a los guatemaltecos y extranjeros mayor movilidad, a un costo competitivo, a las principales zonas de atracción



00000047

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

En este sector existe un crecimiento de tráfico de turistas proyectado de 50% el que se centralizará en el Aeropuerto La Aurora, por lo que es importante consolidar y fortalecer el sistema aeroportuario nacional para que existan vuelos de interconexión.

Por lo anterior, se quiere potenciar el turismo con México y posicionar al Mundo Maya en los circuitos turísticos que provienen de ese país y los flujos principales de turistas vía carretera. Entre éstos, la mayor parte provienen de El Salvador, siendo el mayor destino de turistas la capital y la región central del país. Guatemala como Plataforma Exportadora.

Es necesario garantizar a las cadenas productivas de Guatemala, la salida de sus bienes a las rutas de transporte internacional, aumentar la competitividad de las cadenas productivas al permitir la exportación eficiente por la vía del transporte que satisfaga más sus necesidades,

Los flujos de exportación más importantes son la zona central hacia los puertos (Santo Tomás de Castilla/Puerto Quetzal) y a El Salvador, los cuales concentran el 52.7% del total de las exportaciones. Es importante mencionar que la carga aérea tiene una participación relevante. El 68% de las exportaciones vía terrestre tienen como destino final El Salvador y la mayor región generadora de exportaciones es la zona Centro Occidente.

Guatemala como Centro Logístico y de Servicios.

El objetivo principal es incrementar el tráfico internacional de mercancías con los países vecinos, lo cual permite crear mayores actividades de valor agregado y da soporte al posicionamiento energético, al hacer eficiente la importación de materias primas y combustibles.

La importación vía aérea tiene una participación muy importante, ya que representa el 3% del mayor flujo de entrada de mercancías. El hinterland de los puertos se extiende a las regiones de Honduras, El Salvador y de la parte sur de México. El principal punto de entrada es Puerto Quetzal, seguido de Santo Tomás de Castilla, ambos concentran el 64% del total de las importaciones. La mayor importación de vehículos, gasolina y textiles se genera en Puerto Quetzal.

Facilitará la movilidad de los ciudadanos a un costo competitivo y sin pérdidas de tiempo, facilitará la movilidad de los bienes ayudando a reducir el número de externalidades (accidentes, contaminación, tráfico, etc.).

Existen flujos importantes de carga y pasajeros al interior o bien que cruzan la Ciudad de Guatemala, alcanzando en ciertos puntos hasta 65,000 TPDA. La proporción de caminos no pavimentados es elevada, 59% alrededor de un 10% de hogares se encuentra aislado sin acceso a caminos. El índice de longitud vial c/1000 habitantes es de 1,19 (mientras que el promedio latinoamericano es de 7,31). El crecimiento de



00000048

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

la red vial ha sido en promedio 3% anual en los últimos 21 años. Existe una gran cantidad de caminos sin inventariar.

Los Programas Estratégicos para mejorar la competitividad en infraestructura de Guatemala son:

1. Vial
 - Conexión entre Puertos e Ingresos al área Metropolitana..
 - Desarrollo de los Ejes Troncales CA-2 (Occidente - Oriente) y CA-9 (Pacífico - Atlántico) a 4 carriles y bajo estándares de pesos y dimensiones adecuados.
 - Fortalecimiento de los principales tramos carreteros y la capacidad de los principales puntos fronterizos con el Salvador, Honduras, México y Belice.
 - Construcción de la Franja Transversal Norte, revisando características técnicas (pesos y dimensiones).
 - Ampliación de la red vial a todos los hogares Guatemaltecos y mejoras a las vialidades ya existentes.
2. Aeroportuario
 - ❖ Consolidación de un sistema aeroportuario integrado por 5 aeropuertos internacionales (con tráfico de interconexión a la Aurora), con infraestructura para la carga aérea y los pasajeros y de 17 aeródromos nacionales que cuenten con la infraestructura mínima adecuada Consolidación del Aeropuerto La Aurora, para garantizar su capacidad a largo plazo, tanto para la carga aérea como para los pasajeros.
 - ❖ Construcción de las terminales de contenedores, cruceros y graneles.
 - ❖ Mejoramiento de la infraestructura del sistema portuario de Guatemala.
 - ❖ Desarrollo de dos centros logísticos en los hinterlands de Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y otro centro logístico en el Occidente del país.
3. Mantenimiento
 - ➔ Mantenimiento que garanticen la óptima operación tanto de la nueva infraestructura como de la que existente.

Para poder articular los programas de infraestructura que mejoran la competitividad del país, es necesario realizar las reformas legales como institucionales para su implementación. Por lo que es necesario contar con un marco legal que facilite las alianzas Público-Privada para el desarrollo de infraestructura económica que garantice la operación a largo plazo.

En la tabla siguiente se muestran los requerimientos indicativos de inversión gubernamental, presentada en la Plan Multimodal de Obras de infraestructura, en cada uno de los conceptos en los que no existiría



00000049

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

participación privada, también se especifica el lapso de tiempo de cada requerimiento, así como la inversión anualizada.

Inversión Gubernamental (Cifras en millones USD)	(Rango	(Rango	frame	anual (sup)	anual (inf)
Anillo Metropolitano (sin radiales de acceso)	\$800,00	\$640,00	3	\$266,67	\$213,33
Desarrollo de los Ejes Troncales CA-2 y CA-9*	\$400,00	\$340,00	2	\$200,00	\$170,00
Fortalecimiento de los principales tramos carreteros y la capacidad de los principales puntos fronterizos	\$200,00	\$150,00	4	\$50,00	\$37,50
Ampliación de la red vial existente a todos los hogares Guatemaltecos y mejoras a las vialidades ya existentes	\$600,00	\$400,00	7	\$85,71	\$57,14
Desarrollar sistema aeroportuario	\$40,00	\$20,00	4	\$10,00	\$5,00
Consolidar mejoras en La Aurora	\$102,00	\$102,00	5	\$20,40	\$20,40
Mejoramiento de la infraestructura del sistema portuario	\$50,00	\$30,00	2	\$25,00	\$15,00
Inversiones totales en infraestructura	\$2.192,00	\$1.682,00		\$657,78	\$518,38
Inversiones en mantenimiento carretero				\$130,00	\$120,00

* El monto de inversión gubernamental para el desarrollo de los Ejes disminuiría dependiendo de la involucración del sector privado bajo un esquema APP

Debido a que las inversiones no son homogéneas, en el lapso de tiempo proyectado, se realiza una estimación de los flujos de inversión gubernamental en un horizonte de tiempo a 8 años.

Cifras en millones (USD)		Año						
		1	2	3	4	5	6	7
		\$657,78	\$657,78	\$432,78	\$166,11	\$106,11	\$85,71	\$85,71
		\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00
Total Anual		\$787,78	\$787,78	\$562,78	\$296,11	\$236,11	\$215,71	\$215,71
Total Anual Quetzales		\$6.101,36	\$6.101,36	\$4.358,74	\$2.293,41	\$1.828,71	\$1.670,71	\$1.670,71

Respecto a la participación del sector privado en los proyectos de inversión, se indican los montos estimados (en los intervalos superiores e inferiores y el tiempo proyectado de los mismos).

La inversión en infraestructura es necesaria para mejorar la productividad y competitividad del país, además se requiere la modernización del sistema aduanero, creación de parques industriales, elevar la capacidad de generación hidroeléctrica en MW 2567.2 (US\$3,850.8 millones), siendo los principales proyectos Chulac, Sálala, y proyecto El Arco, así como elevar la generación geotérmica en 430 MW (US\$967.5 millones).

Sin embargo, para realizar esta inversión, el Estado debe buscar recursos sólidos e innovadores que le permitan aumentar la infraestructura para la competitividad, sin comprometer los escasos recursos fiscales de que dispone para inversión social. En consecuencia, maximizando la eficiencia de los recursos fiscales de que dispone Guatemala, debe enfrentar las brechas de inversión vinculadas a los sectores más



00000050

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

dinámicos del país, desarrollando nuevos modelos de gestión, con provisión privada de la infraestructura y de los servicios necesarios para el crecimiento del país.

El desarrollo de un sistema efectivo y eficiente de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica en Guatemala, requiere estructurar un marco jurídico institucional y de gestión que garantice, a la sociedad guatemalteca, que este esquema efectivamente obtenga los propósitos que han sido fijados para lograr la competitividad.

ANALISIS DE LA INICIATIVA DE LEY

La Iniciativa de Ley 3472 establece un marco normativo, que incentiva el desarrollo y la atracción de inversiones nacional y extranjera de importante valor económico en los sectores más dinámicos de la economía, por medio del cual se velar por:

- 1) Asignación más eficiente de recursos;
- 2) generación de una institucionalidad especializada adecuada a esos fines, que de manera eficaz desarrolle las labores de elección de proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, relación con las instituciones del Estado contratantes, ejecución de los contratos y vigilancia de los mismos;
- 3) la existencia de adecuados contrapesos entre las entidades del Estado que se relacionen para esos fines;
- 4) el desarrollo de las Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, por quien se haya adjudicado, a través de procedimientos competitivos y transparentes;
- 5) la generación de mecanismos que limiten la posibilidad de que los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica se modifiquen o amplíen en ausencia de competencia;
- 6) el otorgamiento de estabilidad y seguridad jurídica a los contratos; y,
- 7) la generación de mecanismos de resolución de controversias funcionales a la eficacia que requieren los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica para su adecuada marcha, así como a su complejidad.

La normativa contenida en esta Iniciativa de Ley, en particular, establece:

- a) Establecer los mecanismos de licitación y de contratación que sean más eficientes para lograr los fines económicos antes descritos, en cada área de la economía en la que se desarrollen Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- b) Asignar el proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica a aquella entidad privada, que para otorgar el servicio ofrezca objetivamente eficiencia;
- c) Otorgar garantías para reducir los riesgos y el costo de financiamiento del proyecto;

Cali
24



00000051

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- d) Prever adecuadamente los mecanismos que otorguen al Estado la adecuada flexibilidad como para planear y pactar, caso a caso; .

Excepciones de aplicación de esta Ley:

- 1) A los sectores que disponen de leyes específicas y que dispongan de libre competencia.
- 2) A concesiones y contratos celebrados entre el Estado y Privados, con anterioridad a su entrada en vigencia y bajo el imperio de normas legales que establecen modalidad de contratación diferente a la de esta Iniciativa de Ley.
- 3) A otros contratos que por su naturaleza, les es inherente y les rige la Ley de Contrataciones del Estado.

Instituciones que crea esta Ley:

- a) La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
- b) El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- c) La Dirección Ejecutiva;
- d) La Dirección de Fiscalización
- e) El Registro Público de Iniciativas de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Esta Iniciativa de Ley desarrolla los procedimientos plasmados en la Constitución Política de la República, como es el caso de los procedimientos de expropiación aplicables a proyectos de APD y da cumplimiento a todos y cada uno de los principios constitucionales aplicables.

Esta Ley es autocontenida, regula los aspectos relacionados a ésta para hacerla congruente y coherente, con el objeto no sólo de facilitar su aplicación, sino también para inspirar confianza al potencial inversor, al encontrar reglas claras e integrales, previo a su evaluación para decidir el asiento de sus capitales en Guatemala.

Un cuerpo normativo de esta naturaleza inspira confianza y atrae inversiones estables y sólidas, no capitales golondrinas.

La Ley crea un órgano especializado del Estado para realizar proyectos y contrataciones de APD.

DE LA INICIATIVA DE LEY

A la iniciativa 3472 se le modificó la denominación por "LEY DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA", la que cuenta con 112 artículos.



00000052

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- La ley propone principios generales de aplicación, siendo éstos los siguientes:
- ✓ Rectoría del Estado;
 - ✓ Transparencia y auditoría social;
 - ✓ Rentabilidad social;
 - ✓ Eficiencia económica;
 - ✓ Distribución de riesgos;
 - ✓ Competencia de los participantes privados;
 - ✓ Seguridad jurídica;
 - ✓ Temporalidad;
 - ✓ Responsabilidad fiscal; y,
 - ✓ Fiscalización independiente.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El contenido de este Título desarrolla el ámbito de aplicación de la ley para realizar proyectos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, por medio de un marco normativo que genera competencia ex ante, por el derecho a otorgar el servicio.

Se establece, como principio rector de todo el sistema de P3, la obligación que asume el participante privado de mantener, durante toda la vigencia del contrato, los niveles de servicio y estándares técnicos determinados en las bases de licitación. Con lo anterior se pretende asegurar el efectivo cumplimiento de los fines públicos que fundamentan la suscripción de los contratos de P3.

Se exceptúa del ámbito de aplicación de esta Iniciativa de Ley las materias que cuentan con leyes específicas y que en ellas se establezca competencia.

Las instituciones del Estado autónomas, centralizadas, desconcentradas o descentralizadas, incluidos los Organismos Legislativo y Judicial, podrán sujetarse al marco normativo contemplado en esta Iniciativa de Ley para contratar con el sector privado en la construcción y mantenimiento de obras y prestación de servicios.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES



00000053

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Este Capítulo desarrolla los principios rectores que rigen la presente Iniciativa de Ley. Es de resaltar que éstos son producto de los distintos diálogos realizados a nivel nacional, en los cuales participaron líderes de diversos sectores sociales, de todas las regiones del país.

Cabe señalar que los mismos se consideran como los fundamentos filosóficos-jurídicos mínimos en que se ha inspirado esta normativa legal, todo ello con el afán de que esta Iniciativa, al convertirse en Ley, tenga la fuerza necesaria para que su aplicación colectiva lleve a alcanzar el bien común y bienestar social. Los principios rectores desarrollados, son:

- Rectoría del Estado;
- Transparencia y auditoría social;
- Rentabilidad social;
- Eficiencia económica;
- Reparto de riesgos;
- Competencia por el derecho de dar el servicio;
- Seguridad jurídica;
- Temporalidad;
- Responsabilidad fiscal; y,
- Fiscalización independiente.

Un aspecto relevante de la Iniciativa de Ley es que cada uno de los principios mencionados cuenta con explicación y definición.

TÍTULO II

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

CAPÍTULO I

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

El Título II desarrolla la institucionalidad necesaria para poder implementar de la manera más eficaz y eficiente el innovador sistema de contratación a través de contratos P3.

Se determinan las autoridades administrativas involucradas en los mecanismos de P3 y se persiguió resguardar, en consonancia con las mejores prácticas internacionales:



00000054

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- I. la división de roles administrativos entre el planeamiento de proyectos, su regulación y fiscalización;
- II. la fijación de adecuados contrapesos entre los distintos funcionarios a cargo de las competencias administrativas en relación a los proyectos de P3;
- III. el establecimiento de las medidas de publicidad y otras necesarias para garantizar la independencia de su actuar.

Se crea la denominada Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, como una entidad descentralizada, con autonomía normativa, económica, financiera, técnica y administrativa, así como con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, con competencias, entre otros, para elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el desarrollo y buen funcionamiento de la modalidad de contratación público privada regida por la Ley y asesorar a toda institución del Estado que desee contratar servicios públicos a través de esta modalidad de contratación.

Se establece que la Institución Contratante del Estado es la que suscribe los contratos, previa autorización de sus autoridades superiores y por el Consejo de la Agencia.

Se crea un fondo de capital privativo, destinado a fortalecer la independencia financiera de la Agencia, permitiendo establecer reservas para enfrentar obligaciones de pago que se generen para con los participantes privados, así como la realización de estudios de pre-inversión y factibilidad, incluidos los ambientales.

Se contempla la posibilidad de que las entidades descentralizadas y autónomas del Estado puedan utilizar este mecanismo de contratación a través de convenios mandatos suscritos con la Agencia, por medio de los cuales encargan a la Agencia el desarrollo de proyectos de P3 en los términos de esta Iniciativa de Ley; ello, con el objetivo de hacer extensivas a estas entidades las ventajas y beneficios derivados del desarrollo de proyectos bajo mecanismos de P3.

CAPÍTULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE PRIVADO

Adicionalmente a la fijación de las potestades asignadas a la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y a las instituciones del Estado contratantes, se establece un marco mínimo de derechos y obligaciones, propios de una ley especial como ésta, aplicables a toda persona que participe en la ejecución de un proyecto de P3 en su calidad de participante privado.

TÍTULO III

DE LA LICITACIÓN



00000055

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

CAPÍTULO III

ACCIONES PREVIAS AL RÉGIMEN DE LICITACIÓN

Previo a la invitación a licitar la ejecución de un proyecto P3, se pretende constituir un marco de garantía a la población en general, y de cumplimiento de los mayores estándares de transparencia, atendida la relevancia para toda la población en la ejecución de un proyecto de P3.

De esa manera, previo a efectuar la licitación de un proyecto P3, se establece la obligación de realizar los estudios que permitan determinar:

- La conveniencia para el Estado de desarrollar el proyecto bajo la modalidad de contrato de participación público privada;
- La estimación del impacto presupuestario y financiero en los períodos de ejercicio fiscal durante los cuales se desarrollará el contrato;
- Que las obligaciones contraídas por el Estado, en virtud del contrato de participación público privada se ajusten al límite de endeudamiento, cuando se comprometan subsidios futuros por parte del Estado;
- El impacto social del proyecto, el cual identificará a la población directamente afectada estableciendo las mitigaciones por los daños provocados por el desarrollo del proyecto; y,
- El impacto ambiental del proyecto.

Adicionalmente, se introduce la obligación del Estado de establecer un previo acercamiento y coordinación directa con aquella población afectada por el proyecto con miras a establecer soluciones para mitigar los daños esperables a ser provocados por la ejecución del proyecto.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LICITACIÓN

Para preparar las bases de licitación, se debe contar con la participación de la institución contratante del Estado, así como de los dictámenes pertinentes para garantizar la viabilidad del proyecto en esta modalidad y el equilibrio económico del país.



00000056

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Las licitaciones tendrán carácter público debiendo ser nacionales y/o internacionales y podrán presentarse a ellas las personas individuales y/o jurídicas nacionales o extranjeras que cumplan los requisitos y exigencias que establezca la Ley.

Se establece un régimen de prohibiciones para participar en el proceso de licitación, con miras a garantizar la transparencia y la igualdad de los participantes privados en el proceso de contratación del proyecto. Las adjudicaciones deben ser aprobadas por el Consejo.

Luego, se establece para el caso de proyectos complejos la facultad de realizar un proceso de precalificación de licitantes.

Finalmente, para acelerar el proceso de contratación y otorgar garantías de igualdad de trato a los licitantes, se establece para la Agencia la obligación de presentar junto a las bases de licitación, el proyecto de contrato, existiendo un plazo para que los privados realicen observaciones al mismo.

Las partes pueden impugnar a través del recurso de reconsideración, que no es más que una segunda revisión por parte de la autoridad que emitió la resolución que causa agravio. Este recurso es reconocido internacionalmente y es equivalente al recurso de reposición que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo.

El recurso de reconsideración se incorpora a este proyecto de ley, para que los inversores al analizar el riesgo país inversión, no se encuentren con los vestigios dilatorios y poco eficientes que mantiene el recurso de reposición en Guatemala. Por otro lado, la resolución del recurso de reconsideración puede impugnarse a través del recurso de lo contencioso administrativo.

TÍTULO IV
DE LOS CONTRATOS DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA

CAPÍTULO I
SUSCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

La Iniciativa de Ley contempla que los contratos de P3 tendrán carácter solemne, y serán celebrados entre la Institución Contratante del Estado y el participante privado. A efectos de garantizar la consolidación del principio de rectoría del Estado, se establece que dichos contratos deben constar en escritura pública, la cual debe ser autorizada por el Escribano de Cámara y de Gobierno.

Para los proyectos de P3, se diseña dentro del proyecto la normativa específica de expropiaciones en materia de alianzas para el desarrollo, para evitar demoras o paralizaciones que puedan afectar significativamente la viabilidad del proyecto. Se contempla la facultad de que las partes de adquirir ~~garantías de riesgo político otorgados por Organismos Multilaterales de Garantía de Inversiones.~~



00000057

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Se norma la forma de constituir y el contenido de la prenda sobre los flujos futuros del proyecto, para otorgar los resguardos mínimos necesarios para la participación de entidades financieras en el financiamiento de proyectos de P3.

CAPÍTULO II

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

Se establece la regulación para entregar los bienes por parte del participante privado al Estado y viceversa, de conformidad con lo que se hubiera establecido en las bases de licitación y el contrato.

De igual manera se establecen los casos de posible indemnización al participante privado. Ésta corresponderá cuando se produzcan actos de autoridad pública que afecten específicamente y en forma significativa el equilibrio económico del contrato y que no hubieran sido previstos al momento de la presentación de las ofertas.

Se establecen las formas de indemnizar en caso de incumplimiento de una de las partes.

CAPÍTULO III

TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS AL ESTADO

Se establece el régimen de terminación de los contratos de P3, el que debe atenderse a los supuestos siguientes:

- Por vencimiento del plazo;
- Por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales;
- Por las causas que se estipulen en las bases de licitación; y
- Por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa no imputable a las partes, que impida el cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo al principio de rectoría del Estado, se establece la facultad de la Agencia de poner término anticipado al contrato con compensación al participante privado y por razones de interés público, durante la fase de construcción en los términos establecidos en la Ley.

TÍTULO V

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO



00000058

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Se contratará a un jefe de proyecto para el control de la inversión de cada contrato de P3 durante su fase de construcción.

Para la etapa de explotación, se crea la Dirección de Fiscalización, cuya competencia es la de fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio y los estándares técnicos comprometidos en los contratos de P3. Se establecen las facultades de esa Dirección de Fiscalización, entre las cuales se encuentra, la de requerir información, sancionar, y exigir el respeto de los derechos de los usuarios, incluyendo su derecho de estar informados sobre aspectos del servicio y que se atiendan sus reclamos. En particular se establecen explícitamente los derechos y deberes de los usuarios.

La Dirección de Fiscalización reporta directamente al Consejo debe coordinar con la Institución contratante del Estado.

TÍTULO VI

DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Los proyectos P3 son de naturaleza compleja y contratación especializada, las controversias pueden constituirse en un obstáculo importante para la ejecución del proyecto contratado.

La iniciativa de Ley propone el establecimiento de un sistema arbitral, mediante cláusula compromisoria o arbitral en el contrato, a través del que se resuelvan las controversias sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, con el objetivo de constituirse en un mecanismo eficaz, especializado y expedito de resolución de controversias, de manera funcional a los objetivos de eficiencia perseguidos por medio de los mecanismos de P3. Se trata de la creación de Comisiones Arbitrales *ad-hoc* para cada contrato de P3, cada una de las cuales estará a cargo de resolver las controversias originadas durante toda la vigencia del contrato, a través de conciliación o arbitraje.

Es importante recalcar que las Comisión Arbitrales constituyen la jurisdicción exclusiva para resolver los conflictos jurídicos vinculados a los contratos de P3. Por ello, la resolución de las controversias por la Comisión Arbitral *ad hoc* será el único mecanismo de resolución de los conflictos, de naturaleza privada y especializada, reconocido en la Ley, el que será ajeno a la jurisdicción ordinaria. Deberá ser pactado necesariamente *ex ante* a dichos conflictos en el contrato de participación público privada.

El laudo definitivo y todos los documentos que se utilicen en el proceso deben ser públicos.

Además, de conformidad a lo que permite la Constitución Política de la República, se reconoce la facultad de las partes a acudir a jurisdicción arbitral internacional ante CIADI, de conformidad a las normas procedimentales que la rigen, con las modificaciones que ese mismo sistema permite y que se incluye en el proyecto de ley.



00000059

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

CONSIDERACIONES LEGALES

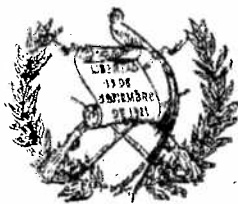
Del análisis legal realizado por los asesores de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, se llegó a la conclusión que el presente anteproyecto de ley no contraviene ninguna disposición constitucional o legal vigente, por lo que es procedente la aprobación del mismo por parte del pleno del Congreso de la República.

OPINIONES RECABADAS

- I. Cámara Guatemalteca de la Construcción: con nota 01 de octubre del 2008, CGC-342-2008/1515-001 emitió opinión a dicha iniciativa, y adjunta dictamen jurídico de la misma.
- II. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: con nota de fecha 19 de agosto del 2008, DVFA-157-08-2008GC/lca, remite observaciones A.J. No. 71-2008 del Licenciado Manuel Antonio Juárez, Asesor Jurídico de ese Ministerio, en donde se informa que fueron contemplados los cambios por dicho Ministerio.
- III. Ministerio de Finanzas Públicas: con nota del Despacho Ministerial de fecha 28 de agosto del 2008, propone la aprobación de dicha iniciativa de Ley en adición a los comentarios remitidos por el grupo técnico del Gabinete Económico de Gobierno, los cuales coadyuvarán el cuerpo legal que impulsa las alianzas para el desarrollo, en el marco de las prioridades del Gobierno.
- IV. Equipo técnico del Gabinete Económico de Gobierno el cual fue conformado por Lic. Enrique Betancourt, Lic. Carlos González y Lic. Edgar Reyes, Ministerio de Economía; Lic. Fredy Gómez, de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-; Lic. Dorval Carias y Lic. Ricardo Barrientos del Ministerio de Finanzas Públicas; Lic. Manuel Juárez y Lic. Claudio Rodríguez, Ministerio de Comunicaciones; Lic. Leonel Moreno, Banco de Guatemala; Lic. Oswaldo Lapuente de SEGEPLAN; Lic. Ricardo Estrada de la Superintendencia de Bancos; Lic. Aarón Velásquez del Ministerio de Agricultura; Lic. Alejandro Palmieri del Ministerio de Energía y Minas; Licda. Susan Pineda, de PRONACOM; Licda. Brenda Quiñones de Invest in Guatemala; quienes emitieron propuestas de reforma a dicha iniciativa por medio de documentos técnicos remitidos a la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

CONCLUSION

Con base a lo antes expuesto y lo considerado y al tenor de lo preceptuado por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, emite **DICTAMEN FAVORABLE** respecto a la iniciativa de Ley 3472 ~~"Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica"~~ con las modificaciones incorporadas al



00000060

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

texto del proyecto de ley que incluyen su denominación, la cual se somete a consideración del Honorable Pleno para que, de merecer su aprobación, dicha iniciativa se convierta en ley de la República.

**DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR
DEL ORGANISMO LEGISLATIVO A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
OCHO.**

Mariano Rayo Muñoz
Presidente

Jorge Méndez Herbruger

Oscar Armando Quintanilla Villegas

José Alejandro Arcevalo Alburez

Oliverio García Rodas

Christian Michael Ros Acevedo

Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio

Fredy Viana Ruano

Eduardo Genis Quej Chen

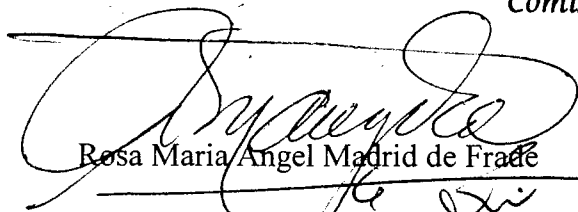
Ricardo Antonio Saravia Ferrebiarte

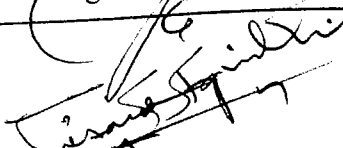
Carlos Rafael Fión Morales

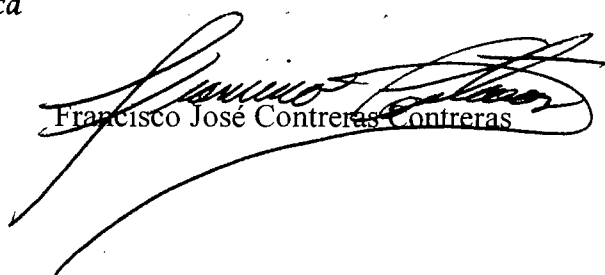


00000061

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

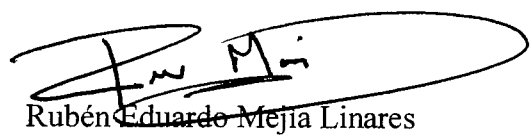

Rosa María Ángel Madrid de Frade


César Augusto Del Aguila López


Francisco José Contreras Contreras

César Emilio Fajardo Morales


Delia Emilda Back Alvarado de Monte


Rubén Eduardo Mejía Linares

Armando Enrique Sánchez Gómez

César Leonel Soto Arango



00000062

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

ANEXO AL DICTAMEN 12-2008

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Organisation for Economic Co-operation and Development) -OCDE -por sus siglas en Inglés, emitió el documento intitulado **"PRINCIPIOS DE OECD PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN INFRAESTRUCTURA"**, que constituyen inspiración para los países para ofrecer al inversionista un clima de negocios estable y respetuoso que permita su atracción en proyectos de participación público privada.

En el preámbulo del mismo se señala que la carencia de infraestructura en los países en vías de desarrollo, es un importante obstáculo para satisfacer las necesidades de la población, para fomentar el desarrollo y para cumplir con los fines de la Declaración del Milenio. Dentro del área del OECD, varios países encaran el doble desafío del aumento de la demanda y del envejecimiento del sector infraestructura, lo que puede ser un obstáculo para el crecimiento sostenible. Para responder a estas necesidades, señalan, los gobiernos no pueden ignorar la solución de priorizar la participación del sector privado en infraestructura. Además, esta participación puede presentar otros beneficios además de la importación de capital. Permite, por ejemplo, beneficiar el uso de un ambiente más concurrente y la movilización del expertaje tecnológico y las competencias de gestión del sector privado en los intereses públicos. En un gran número de países miembros de OCDE y del resto del mundo, la participación del sector privado en infraestructura ha contribuido en estas últimas décadas en aumentar la cobertura y la eficiencia de los servicios de infraestructura. En el documento referido, que sirve de inspiración para introducir mejores prácticas en las legislaciones y las actividades de la administración pública, se enumeran y explican una serie de principios que tienen como fin ayudar a los gobiernos que buscan la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, atraer las inversiones necesarias y movilizar los recursos del sector privado, en beneficio de la sociedad y en la perspectiva de un desarrollo durable. Estos principios han sido recomendados para guiar a las autoridades públicas en la implementación de la participación privada como una posible solución para mejorar la provisión de los servicios públicos en materia de infraestructura, y al mismo tiempo, para que sirvan de inspiración a las normativas que sobre esa materia se promulguen. Los principios referidos son los que a continuación se enumeran:

I. Decidiendo sobre una provisión de infraestructura pública o privada²

² Traducción libre. Guatemala Consulting. Febrero, 2008.



00000063

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Principio 1: La elección de las autoridades públicas entre una provisión de infraestructura pública o privada debe de estar basada en un análisis de costo beneficio tomando en cuenta las distintas alternativas que existen, el sistema completo de sistemas de infraestructura y la proyección de costos financieros, no financieros y beneficios en el transcurso del proyecto.

La participación de operadores privados aventaja esencialmente a los proyectos públicos cuando a nivel operacional y administrativo muestra mayores eficiencias (tales como expertajes técnicos y competencias de gestión de los operadores comerciales); e involucrando una mayor competencia y aumentando los servicios hacia los consumidores finales.

Incluso cuando el sector público, dependiente de una tasa de créditos, tiene acceso a una provisión de menor costo en relación a las compañías privadas, las eficiencias conseguidas por el sector privado aventajarán sus elevados costos.

Algunas autoridades públicas soportan las cargas fiscales con restricciones de liquidez o elevando sus fondos hasta un punto donde el financiamiento privado de infraestructura aparezca como la más económica o la única factible. Esto limita las opciones de las autoridades públicas de planificación que deberán optar por el financiamiento privado o renunciar a la infraestructura. Sin embargo, esto no alterara el principio de analizar los costos y los beneficios, trayendo a cuenta los costos y riesgos durante toda la ejecución del proyecto. Empezar el financiamiento privado para proyectos de infraestructura como la mejor manera de adquirir ventajas adicionales sin traer a consideración el largo período económico, las consecuencias financieras y sociales, muy probablemente traerá problemas.

El análisis de costos y beneficios necesariamente deberá traer a cuenta un sistema completo de provisión para la infraestructura y no únicamente referirse a contratos individuales. La comparación con los costos y beneficios de otras alternativas o competidores en el proyecto, también deberá ser asumida. Otra importante consideración es la habilidad que deberán tener las autoridades para entender y llevar a cabo las complejas obligaciones contractuales en la participación privada en infraestructura. Los riesgos también deberán ser incluidos en el análisis de costos y beneficios.

Principio 2: Ningún proyecto de infraestructura, atendiendo al grado de participación privada, debe ser puesto en marcha sin atender el grado en que los costos van a ser recuperados de los usuarios finales, y en caso de imprevistos, las fuentes de financiamiento que pueden ser movilizadas.

Es necesario evaluar de manera realista el costo que representan los objetivos fijados por las autoridades para la cobertura y el acceso de los servicios y la parte de ese costo que puede ser recuperado con las tarifas que pagan los usuarios finales. En caso de originarse algún déficit en el fondo presupuestario, se deberá reintegrar plenamente por las autoridades encargadas.



00000064

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Los servicios de infraestructura se encuentran dentro de un sector que tradicionalmente ha recibido grandes subsidios, como medio de balance de un sector entre la viabilidad comercial y los objetivos sociales. La necesidad de determinar un sistema óptimo de subsidio público como principio aplica por igual a las provisiones públicas o privada de los servicios de infraestructura.

Principio 3: La distribución de riesgos entre las partes del sector privado y el sector público serán determinadas principalmente por la elección del modelo de participación del sector privado, incluyendo la asignación de responsabilidades. La selección de un modelo en particular y de una asignación asociada de riesgos debe de estar basada en atención al interés público.

Comúnmente los principios referentes al cubrimiento de riesgos, implican que estos sean asignados a la parte contractual que se encuentre en mejor capacidad para cubrirlo. Si las partes contractuales no tienen la misma capacidad para sacar adelante las cargas financieras, deberá necesariamente tomarse en cuenta. Esto implica que el riesgo que pueda ser mitigado por el participante privado, debió haber nacido en el sector privado, mientras que el riesgo de naturaleza pública debe residir en el participante público..

La asignación de riesgo es generalmente asignada por el modelo del sector privado involucrado. Las estipulaciones contractuales respecto a compromisos de servicio, mantenimiento, cobertura, obligaciones financieras y demás consideraciones estarán incluidas en la asignación de riesgos.

Principio 4: La disciplina y transparencia fiscal debe de ser salvaguardada, y la potencial implicación de las finanzas públicas de compartir responsabilidades en materia de infraestructura con el sector privado debe de ser totalmente comprendida.

La disciplina fiscal y la transparencia deben ser salvaguardadas, y las potenciales implicaciones financieras del sector público de compartir responsabilidades en materia de infraestructura con el sector privado, deben ser completamente entendidas.

La participación pública en infraestructura no debe usarse como vía para escapar a la disciplina presupuestaria, es decir, no debe retirarse masivamente compromisos financieros del sector público. Los proyectos de infraestructura deben, generalmente, ser reflejados por los presupuestos del sector público, a menos que todos los riesgos relevantes realmente residan en el sector privado. Además, si los riesgos son mitigados por garantías públicas, entonces colocar dichas inversiones fuera del presupuesto se vuelve aún más cuestionable.

Cuando la distribución de riesgos entre los sectores público y privado involucran garantías, sean estas implícitas o explícitas, que deba pagar el sector público a los operadores comerciales, estas ~~garantías necesitan ser tomadas en cuenta. Deben ser sometidas a un grado similar de escrutinio que~~



00000065

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

el presupuesto público, como cualquier otro gasto. La autoridad pública necesita mantenerse alerta a las posibles consecuencias fiscales, incluyendo eventuales crisis macroeconómicas. Necesitan prever en los presupuestos anuales el costo estimado de pagos para cubrir dichas garantías. Mecanismos de control por medio de terceros, por ejemplo, a través del parlamento (congreso), podría ayudar a la integridad del proceso.

II. Fortaleciendo el Ambiente Institucional.

Principio 5: El posible fomento de un entorno para la inversión en infraestructura, implicará altos estándares de calidad de gobierno, público y corporativo, transparencia y la correcta aplicación del derecho, incluyendo la protección de la propiedad y de los derechos contractuales, es esencial para atraer la participación del sector público.

Permitir un buen ambiente para la inversión en infraestructura, que implicaría altos estándares en la administración pública y corporativa, transparencia y estado de derecho, incluyendo protección de la propiedad y derechos contractuales; es esencial para atraer la participación del sector público.

El éxito de la participación privada en el sector de infraestructura, depende, como cualquier otra actividad comercial, de la calidad del ambiente de inversiones del país. Las autoridades no deben limitarse a avocarse a un pequeño número de desafíos legales relativos directamente en proyectos de infraestructura (ley de concesiones, privatización, por citar ejemplos). El éxito aquí, dependerá en un amplio rango de legislación y prácticas administrativas relativas a compañías privadas, sus empleados y otros inversionistas, y la habilidad de los proveedores locales y subcontratistas para trabajar junto con los proveedores de infraestructura.

En un ambiente donde las leyes y acuerdos no pueden hacerse cumplir adecuadamente, cualquier otro criterio de éxito resulta irrelevante (es decir, que debe existir un ambiente en que exista certeza de seguridad jurídica, de lo contrario, muy bueno puede ser el ambiente económico, o incluso fiscal, que no resultará atractivo para el inversionista). Este es el caso particular del sector infraestructura, donde los proyectos tienden a ser largos y, en la medida de lo posible, involucran ventajas de propiedad del sector privado, resultando difícil para los inversionistas el desentenderse de estos compromisos. Esto no descarta la posibilidad que tienen los Estados de legislar en interés público, incluso cambiando la legislación atinente a la viabilidad de los proyectos de infraestructura. No obstante, deben hacerlo de una manera transparente, y en la medida de lo posible, predecible, incluyendo previas consultas a los participantes del sector privado y otras personas afectas.

Principio 6: Los proyectos de infraestructura deben estar libres de cualquier grado de corrupción en todas las fases del proyecto. Las autoridades públicas deben tomar medidas efectivas para asegurar la integridad y contabilidad de los sectores públicos y privados y establecer procesos apropiados para determinar, detectar y sancionar la corrupción.



00000066

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Los proyectos de infraestructura deben ser espulgados de corrupción en todos los niveles y en todas las fases del proyecto. Las autoridades públicas deben tomar medidas efectivas para garantizar al sector público, la integridad y responsabilidad; y establecer procedimientos adecuados para desalentar, detectar y sancionar actividad corrupta.

Mientras las prácticas corruptas pueden surgir por una gran variedad de razones, los proyectos de infraestructura financiados privadamente tienen ciertas características que las vuelven especialmente susceptibles a la corrupción. La estructura de monopolio de muchos tipos de suministros puede proveer oportunidades importantes para especuladores, inclusive en las fases de adjudicación. La protección política y la intervención a los proyectos de infraestructura, regularmente dificulta la responsabilidad financiera, y provee un buen manto para cubrir varios tipos de actividades corruptas y malas prácticas, incluyendo disminución en la calidad de los servicios, sobre contratación de personal (abuso en el número de puestos) y remuneraciones excesivamente altas. Si hay dificultades para establecer la relación entre el nivel de capital invertido y la producción del servicio, las prácticas corruptas pueden guiar a la mala distribución de los recursos. La magnitud y duración de los proyectos de infraestructura, crean oportunidades para soborno asociados con la fase de ejecución.

La corrupción puede proliferar en cualquiera de las fases de un proyecto complejo: diseño, adjudicación, ejecución, operación y, dependiendo del proyecto, a la transferencia del bien. Medidas para asegurar transparencia, evaluación y la presencia de pesos y contrapesos deben colocarse para evitar prácticas corruptas en todas las fases del proyecto. En las fases de operación, la participación privada podría proveer opciones para contraatacar algunas formas de corrupción: el poder cobrar tarifas se ha constituido en algunos países, como un medio de palanca para evitar a las autoridades el cobro de pagos ilegales a los usuarios.

En el caso de los proyectos de infraestructura, la corrupción puede ser particularmente problemática, en aquellos lugares donde la participación público privada está sujeta de por sí a la crítica y escepticismo públicos. Dudas acerca de la legalidad de las adjudicaciones y ejecución de los proyectos, inexorablemente magnifican este escepticismo. Además, la selección equivocada de adjudicatarios y la ineficiencia de las operaciones debidas a prácticas corruptas, crean una carga financiera adicional, que finalmente serán cargadas al usuario.

Principio 7: Los beneficios de la participación del sector privado en infraestructura están realzados por esfuerzos en crear un ambiente competitivo, incluyendo actividades subjetivas para asimilar las presiones del mercado, dismantelar barreras innecesarias para crear, implementar y reforzar leyes en relación a la competencia.



00000067

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Los beneficios de la participación público privada en infraestructura son fortalecidos por los esfuerzos para crear ambientes competitivos, incluso fomentando actividades para especializar las presiones comerciales, desmantelando barreras innecesarias para la entrada e implementación y reforzando las leyes de libre competencia.

Los elementos del monopolio en todo el sector de infraestructura, hacen difícil el establecimiento de condiciones para la libre competencia. Las autoridades obtienen los mejores resultados sometiendo cuantas actividades puedan a concursos, mientras exponen los monopolios o escasez de competencia a la opinión pública. Un ambiente internacionalmente abierto a las inversiones facilitará la competencia y maximizará sus beneficios, lo cual se logra ampliando el número de participantes potenciales, y ensanchará el "mercado relevante" más allá de las fronteras nacionales. Para alcanzar estos beneficios, las autoridades deben mantener un ambiente abierto y no-discriminativo para la inversión, y tomar en cuenta las *Recomendaciones Concernientes A La Separación Estructural De Industrias Reguladas* de la OECD. Asegurando que las firmas nacionales y extranjeras puedan competir en iguales condiciones, también implica la observancia de los estándares internacionales en materia laboral y otras materias.

Para los propósitos de eficiencia, los esfuerzos por fomentar la competencia en infraestructura, a menudo van hombro con hombro con el fomento de una reforma estructural. Para alcanzar un buen número de proveedores de infraestructura, suficientes para asegurar un saludable nivel de competencia, medidas de "Separación Horizontal" pueden ser necesarias. La "Separación Vertical", en la que las partes contendientes de la cadena de provisión, se separan de los elementos esenciales de instalaciones, provee de una forma de maximizar el número de actividades de infraestructura que pueden ser sujetas a concurso.

Principio 8: El acceso a mercados de capital para crear fondos operativos es esencial para los participantes del sector privado. Las restricciones de acceso al mercado local y los obstáculos al movimiento del capital internacional, tomando en cuenta consideraciones de política macroeconómica, debe ser retirado paulatinamente.

Acceso a los mercados de capital para capitalizar operaciones es esencial los participantes privados. Las restricciones en el acceso a los mercados locales y los obstáculos a los movimientos internacionales de capital, deben ser eliminados, tomando en cuenta las políticas macroeconómicas.

Los países con buenos mercados nacionales, encuentran fácil y barato involucrar empresas privadas -particularmente operadores internacionales- en los sectores de infraestructura. Donde los rangos de intercambio son compatibles y el capital puede moverse fácilmente dentro y fuera del país anfitrión, los operadores de infraestructura capitalizan sus operaciones en niveles internacionalmente competitivos, y por tanto, no necesitan "cuotas de financiamiento". Cuando los



00000068

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

proyectos de infraestructura se intentan en países sin un completo rango de intercambio (de moneda), o sin un acceso fácil a repatriaciones de inversiones y ganancias, los inversionistas tienen dificultades para mitigar los riesgos de cambio, y usualmente enfrentan un fuerte incentivo para capitalizarse mediante financiamientos locales. En estos casos, el éxito en los proyectos de infraestructura pueden ser impulsados dándole a los inversionistas un completo acceso a mercados de capital. Hasta ahora, las experiencias de las autoridades locales para tratar de compensar los riesgos de cambio de los inversores, aceptando tarifas de infraestructura ligadas a monedas extranjeras, han estado lejos de ser prometedoras.

La inversión pública en infraestructura puede además, ayudar a construir mercados financieros locales. Los préstamos para proyectos de infraestructura pueden asegurarse con el doble de beneficios de bajar el costo de capitalización y adicionando profundidad y liquidez a los mercados locales de capital. Los recursos financieros por comprar dichos instrumentos están disponibles en los sectores de seguros y de pensión, en la mayoría de países.

III. Fines, Estrategias y Capacidades en todo nivel

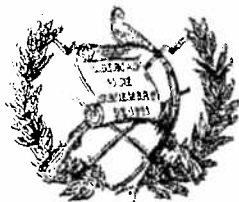
Principio 9: Las autoridades públicas deben asegurar consultas adecuadas con los consumidores finales y otros inversionistas, siendo prioritario al inicio del proyecto de infraestructura.

La participación privada en infraestructura tendrá mayores probabilidades de éxito hasta que las autoridades se hayan asegurado antelación que las garantías previstas son del público interesado y son aceptadas por los consumidores y otros inversionistas. Esto incluye consultas con todas las partes afectadas, estableciendo de manera realista las expectativas que el sector privado pudiera conseguir.

En proyectos de infraestructura que involucren grandes construcciones, un proceso prioritario de consulta con las comunidades con mayor riesgo a ser afectadas, se llevara a cabo para asegurar que el interés de las comunidades afectadas, incluyendo el respeto a los derechos humanos, será tomado en consideración y debidamente protegido.

Un reto peculiar surgirá cuando las controversias surjan después de que el proyecto de infraestructura se inicie. Las autoridades públicas pueden ser incitadas a rechazar la responsabilidad sobre otro en lugar de asumir consultas con las partes sobre la base de verdaderas obligaciones que se originan del proyecto. Esto pone en riesgo el proceso de participación de los diferentes actores y las relaciones a largo plazo con los participantes privados.

Principio 10: La autoridad responsable de proyectos de infraestructura con participación del sector privado deberá tener la capacidad de manejar los procesos comerciales involucrados y de asociar ~~sobre bases iguales a las contrapartes del sector privado.~~



00000069

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Debe de tomarse en cuenta que en muchos países, hacer participar al sector privado en materia de infraestructura, puede representar un cambio radical en los resultados obtenidos en el sector público. El mayor reto para las autoridades públicas y sus empleados involucrados en proyectos de infraestructura será dirigir según la naturaleza comercial del sector privado involucrado en infraestructura.

La habilidad de delegar capacidades y competencias administrativas es otra consideración importante. La participación del sector privado en infraestructura eventualmente involucra tecnología sofisticada, soluciones corporativas y financieras que las entidades gubernamentales difícilmente podría manejar. Este reto no se limita únicamente a países en desarrollo. Incluso en los países con las economías mas avanzadas, incluso algunos con mayor experiencia en temas relacionados al financiamiento privado de infraestructura, una serie de reclamaciones de los participantes del sector privado es debido a implementaciones establecidas por el sector público.

Principio 11: Las estrategias de participación del sector privado en materia de infraestructura debe ser entendido y los objetivos deben ser compartidos en todos los niveles de gobierno y en todas las partes relevantes de la administración pública.

Un asunto concerniente a las autoridades públicas es la coordinación de la política de infraestructura, ya que estrategias divergentes debieran ser buscadas a nivel nacional o fuera de este. La necesidad de una coordinación se presenta del hecho que los proyectos de infraestructura regularmente tienen repercusiones fuera de la jurisdicción en donde son implementados. Varios gobiernos han determinado necesario separar la legislación en materia de subsidios en infraestructura para evitar resultados de baja calidad a nivel local o regional.

Principio 12: Los mecanismos jurisdiccionales de cooperación, incluidos a nivel regional, deben de ser establecidos.

En proyectos de infraestructura incluyan a diferentes jurisdicciones, incluyendo naciones soberanas de una misma región, las precauciones que se tomen, garantizaran la seguridad que los objetivos del proyecto, están exactamente proporcionados y apuntalados por acuerdos formales y mecanismos de resolución de conflictos.

IV. Realizando el trabajo de cooperación público-privado.

Principio 13: Para optimizar la participación del sector privado, las autoridades públicas deben comunicar claramente los objetivos de sus políticas en materia de infraestructura y deben poner en marcha mecanismos de consulta entre los participantes públicos y privados en lo concerniente a sus objetivos y a sus diversos proyectos.



00000070

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Fomentar la confianza entre el sector público y privado es una de las grandes prioridades. En particular, en el caso en que las empresas privadas deciden participar en proyectos de infraestructura en países donde el ambiente de la inversión es calificado como poco atractivo. Si ambas partes deben cooperar en un clima poco propicio para la inversión, será necesaria una amplia visión de los resultados que se pretenden obtener y de los medios necesarios para asegurar a los participantes y evitar costosos errores. En la medida de lo posible, el sector público debería precisar lo que espera de los proveedores de infraestructura en cuanto a los servicios que debe proveer al público, y a las modalidades de las tarifas que pueden ser aplicadas. Los objetivos, mientras son definidos en términos de resultados, son más fáciles de lograr, tienen más pertinencia para las partes involucradas y fomentan la eficiencia y la flexibilidad, mucho más que las otras formulas. Se eliminan entre otros diversos factores de riesgo, desde el punto de vista de los participantes privados, si se les otorga la libertad de responder a las necesidades de los usuarios de la manera que juzguen más conveniente. Desde el interés de una cooperación a largo plazo eficaz entre los participantes públicos y privados, será necesario crear foros o canales que permitan a ambas partes expresar sus preocupaciones. Consultas regulares y oportunas son preferibles en general que las reuniones ad hoc organizadas cuando uno de los contratantes o una de las partes detectan un problema. Para evitar toda actitud que pudiera parecer incongruente, se podrá invitar a terceros interesados a participar en dichas consultas.

Principio 14: Debe haber una divulgación total toda la información relevante del proyecto entre las autoridades públicas y sus participantes privados, especialmente en cuanto el estado preexistente de la infraestructura, las normas de ejecución y las sanciones en caso de incumplimiento. El principio de la debida diligencia debe ser aplicado.

En virtud del principio de la debida diligencia, las autoridades deben tomar las medidas que tomaría generalmente un individuo prudente o razonable para evitar sufrir o para evitar que otro sufra un perjuicio. Esto significa prácticamente que se deben considerar los riesgos previsibles y de divulgarlos, sin ocultar información esencial. En caso contrario, existiría negligencia. Es necesario que en especial que los participantes se comuniquen sin reservas toda la información concerniente al proyecto. Si los datos técnicos, económicos y ambientales adecuados no son transmitidos a los potenciales inversionistas, el proyecto corre riesgos desde el inicio. Si las partes no disponen de suficiente información precisa acerca del proyecto y si las partes inician una relación contractual basándose en estimaciones operacionales, se deberán prever ajustes en los contratos. Durante toda la operación, será necesario poder disponer de información acerca de los controles que el sector público va a ejecutar para decidir si los participantes privados han cumplido con sus obligaciones. En caso de incumplimiento, las sanciones deben haber sido fijadas con antelación o deberán ser fijadas por una instancia judicial, más que por una instancia administrativa.



00000071

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Principio 15: La adjudicación de los contratos de infraestructura o de las concesiones debe estar concebida para garantizar la equidad procedimental, la no discriminación y la transparencia.

En el caso en que la competencia ha sido introducida con éxito en ciertos servicios de infraestructura, las autoridades públicas pueden generalmente atenerse a las fuerzas del mercado para preservar los intereses de los usuarios. Si no es este el caso, y si el proveedor de infraestructuras elegido se beneficia de un monopolio en cierto grado (por ejemplo, en el contexto de una concesión), la regla corrientemente admitida es que, a causa de la competencia del mercado, es necesario hacer que las empresas compitan por el mercado. Pero esto podrá ser más fácil si los costos de entrada o de salida y los costos irreversibles son limitados únicamente en la situación en la cual el operador histórico se beneficia de una ventaja en cuanto a las convocatorias de ofertas ulteriores. La convocatoria a ofertar es generalmente el mejor medio de atribuir los mercados de infraestructura. En pocos casos, pueden ser previstos otros mecanismos, como por ejemplo cuando demasiada información exclusiva es intercambiada durante la fase precontractual. Si se quiere aprender de las lecciones aprendidas en las concesiones de infraestructura de las dos últimas décadas, se considera generalmente que criterios de atribución de mercados relativamente simples para la convocatoria de ofertas tendrán más posibilidades de obtener buenos resultados. Según la regla general, si se quiere obtener los mejores beneficios de las ventajas competitivas de los participantes del sector privado hacia el interés público, es necesario que los criterios de atribución del mercado busquen directamente la cantidad y la calidad, así como el precio de los servicios a proveer a los usuarios. Esto incita a las empresas a proponer soluciones novedosas y eficientes. Los procesos de atribución de mercados algunas veces han sido comprometidos a causa de los recursos y de las capacidades suficientes de las autoridades públicas encargadas de concebirlas y de ponerlas en marcha. Como en el caso de las autoridades de regulación, una de las grandes prioridades debe ser el dotar a dichas autoridades de los medios de acción necesarios.

Principio 16: El acuerdo formal entre las autoridades y los participantes del sector privado debe estar especificado en términos de servicios de infraestructura verificables para proveer al público, sobre las bases de la producción o de las especificaciones de rendimiento de base. Debe contener previsiones que atiendan a las responsabilidades y a la asignación de riesgo en casos imprevistos.

Es más fácil verificar que un contrato ha sido respetado si precisa concretamente la cantidad y calidad de los servicios que serán proporcionados a los usuarios de las infraestructuras. Cuando las tarifas están reglamentadas, son necesarias las disposiciones precisas en cuanto a su evolución futura. Es frecuente en la práctica, es uno de los elementos de los más controvertidos, porque los derechos legítimamente adquiridos de los usuarios existentes están en juego. Es necesario además prestarle importancia a cuestiones como el mantenimiento técnico y en los casos de imposibilidad, las transferencias de tecnología.



00000072

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Las autoridades públicas deben insistir acerca de la regla de la intangibilidad de los contratos: todas las partes contratantes deben atenerse a sus obligaciones, incluso si fueran financieramente desventajosos para ellas. Pero las circunstancias, al evolucionar sobre el conjunto de la duración de un proyecto de infraestructura, los contratos deben ser suficientemente flexibles para tener en cuenta dichos cambios. Una posible solución para conciliar estas preocupaciones es la de enunciar expresamente en los contratos las condiciones que deben ser satisfechas para que puedan ser reexaminadas o renegociadas.

Principio 17: La regulación de los servicios de infraestructura debe ser encargada a autoridades públicas especializadas y competentes, dotadas con recursos adecuados y protegidas de influencias externas de las partes en los contratos de infraestructura.

Las actividades que comportan un elemento de monopolio- a causa de la existencia de un monopolio natural o de un reducido número de proveedores privados- deben ser regulados atendiendo al interés público. Las modalidades precisas de esta regulación no deben relevar a los presentes principios. Las autoridades nacionales van a desear sin duda alguna el apoyarse sobre buenas prácticas admitidas generalmente, en especial en lo concerniente al deber de eficiencia frente al público, las transferencias de eficiencia, la transparencia, la presunción de conocimiento, el control de los precios de transferencia, las reglas contables en el régimen de regulación y la participación de los usuarios. Muy frecuentemente, parece haber amplias posibilidades de arbitraje entre la claridad contractual y la necesidad de una regulación de las infraestructuras. Después de la transferencia de servicios de infraestructura del sector público al sector privado, parece legítimo perseguir acuerdos formales que dejen un escaso margen a las autoridades de regulación. Pero si se prefieren contratos más flexibles para tener en cuenta la evolución del ambiente, será necesaria también más amplitud en el margen reglamentario. El papel de las autoridades es de preservar la independencia y la objetividad de las instancias de la regulación, suscitando en todos los actores la confianza necesaria (y la formación de jurisprudencia), con el fin de que los reguladores puedan llenar esta misión alargada. Durante la fase precontractual y en el momento de las negociaciones, los poderes públicos podrán basarse en la experiencia de organismos reglamentarios especializados para asegurarse de la viabilidad de los acuerdos pactados. Al momento de la fase de explotación, es muy importante que los reguladores presenten una imagen de independencia en relación a las instancias públicas que forman parte de los contratos concernientes a los servicios de infraestructura.

Principio 18: Las renegociaciones ocasionales son inevitables en las asociaciones a largo plazo, pero deben conducirse en buena fe, de manera transparente y no discriminatoria.

Ningún contrato es lo suficientemente flexible para encarar todas las eventualidades. Además, un contrato muy detallado que quiera cubrir todos los aspectos posibles de una sociedad podría en la práctica impedir toda flexibilidad operacional. Disposiciones muy detalladas incitan a los contratantes a buscar fallas, más que a hacer funcionar correctamente la sociedad. En consecuencia,



00000073

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

una renegociación de los contratos es ocasionalmente necesaria para las sociedades a largo plazo, como en los proyectos de infraestructura. La mejor solución, si se quiere preservar a la vez la intangibilidad del contrato y la indispensable flexibilidad, podría ser la de precisar en el contrato cuales son las circunstancias en las cuales se debe llevar a cabo la revisión del contrato. Una comisión permanente de examinadores activa, una comisión de conflictos o una instancia arbitral podría igualmente ser creada dentro del cuadro del dispositivo contractual y contribuir a reforzar las relaciones entre las partes.

Las autoridades nacionales pueden encontrarse en la obligación de tomar medidas legislativas o reglamentarias que modifiquen fundamentalmente las condiciones de la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura. Se admite generalmente que se trata de un derecho soberano de los poderes públicos el reglamentar acorde al interés general, pero ese derecho debe ser ejercido con transparencia y sin discriminación, notablemente con la consulta previa de todas las partes concernientes. Si la medida implementada es tal que la instancia judicial competente considera que esta constituye una expropiación del inversionista, este deberá recibir una indemnización rápidamente, adecuada y efectiva.

Principio 19: Los mecanismos de solución de conflictos deben ponerse en práctica en las disputas que surjan en cualquier momento durante el transcurso del proyecto de infraestructura, los que deben ser resueltos de manera oportuna e imparcial.

En el interés público y en el interés de todos los participantes, la participación privada en materia de infraestructura debe fundarse sobre lo que se pueden llamar "acuerdos durables". Es necesario que las relaciones entre estos acuerdos y los mecanismos que permitan ajustarlos parecen equitativos para todas las partes. Para preservar la relación contractual a largo plazo entre el socio público y el socio privado, el reglamento amigable y la mediación deben ser generalmente preferidos al proceso contencioso judicial y al arbitraje. Los poderes públicos pueden contribuir a este resultado escogiendo esta opción e incluyendo en los contratos de servicio en materia de infraestructura, los mecanismos de solución de conflictos.

Sin embargo, un participante privado va a considerar como riesgos eminentes los acuerdos a largo plazo si no puede apoyarse sobre una instancia imparcial e independiente que regule las diferencias, notablemente en virtud del contrato concebido por las partes. En los países donde el estado de derecho se encuentra profundamente arraigado y se apoya sobre un sistema judicial imparcial y eficaz, los participantes del sector privado podrán ser proclives a buscar la reglamentación de los conflictos frente a una jurisdicción civil o comercial nacional, o frente a un órgano arbitral. Pero la utilización de mecanismos de solución de conflictos entre el inversionista y el Estado en el cuadro de los acuerdos internacionales relativos a las inversiones ratificadas por el país de recepción puede ser igualmente de importancia vital para los inversionistas internacionales.



00000074

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

V. Fomentando conductas de negocios responsables.

Principio 20: Los participantes del sector privado en materia de infraestructura deben respetar los principios aceptados en común y los estándares de una conducta de negocios responsable.

La misión fundamental de las empresas es el identificar y gestionar los proyectos de inversión que procuren un rendimiento competitivo a quienes aportan capital. Dentro del cuadro de esta misión, un comportamiento responsable de las empresas consiste sobre todo en respetar el derecho aplicable, pero no únicamente. Se trata además de responder a las expectativas de la sociedad del país de recepción, que pueden expresarse por otras vías fuera de la legal, en particular en zonas con déficit de gobernabilidad, así como donde las medidas legislativas y reglamentarias no reflejan las aspiraciones de la población. Esto puede concernir en particular al sector de infraestructura cuando los funcionarios del país de recepción tienen un interés directo en las operaciones comerciales. Los principios rectores del OCDE, según las intenciones de las empresas multinacionales, constituyen los principales instrumentos sobre los cuales los inversionistas pueden basarse en su búsqueda de los principios de un comportamiento responsable. Los Principios rectores constituyen un conjunto de recomendaciones que son dirigidas a las empresas multinacionales y que cubren los principales ámbitos de la ética de las empresas, atendiendo al empleo y a las relaciones de trabajo, los derechos humanos, el medio ambiente, la difusión de la información, la lucha contra la corrupción, la protección del consumidor, la ciencia y la tecnología, la competencia y la fiscalización. Mientras que los Principios Rectores son facultativos para las empresas, los países adheridos, se han propuesto el promoverlos entre las empresas multinacionales que operan de manera local o a partir de sus territorios y a ayudar a las partes que se encuentran en confrontación por circunstancias específicas, proponiéndoles sus oficios para la solución de los puntos contenciosos. Los Principios Rectores traducen prácticas recomendadas para todas las empresas.

Principio 21: Las empresas privadas deben participar en proyectos de infraestructura de buena fe y con el compromiso de cumplir con sus obligaciones.

Puesto que es difícil desentenderse de un proyecto de infraestructura, el sector público y los contratantes privados disponen de medios de presión para mejorar su situación financiera después de la atribución de los mercados. Desde esta perspectiva, los contratantes privados pueden esforzarse en obtener la renegociación de los contratos o hacer lo necesario de tal suerte que sus actividades sean obligaciones rentables sin respetar las condiciones convenidas de prestación de los servicios o de otros compromisos. Pero es de interés de los participantes del sector privado el no poner en riesgo la integridad de los contratos, incluso si esto se traduce como pérdidas a corto plazo. Si se confirma que el inversionista actuó de mala fe, corre el riesgo de ser perseguido por la justicia y de perjudicar su relación de cooperación con el participante público, suscitando el antagonismo de las poblaciones concernientes y desatando críticas de la comunidad internacional. En virtud del



00000075

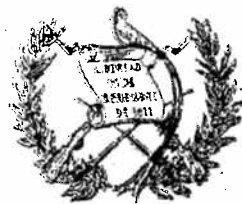
Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

principio de diligencia razonable, los participantes del sector privado, antes de involucrarse en un proyecto, deben proceder a realizar un estudio y a una evaluación de las modalidades de potencial inversión, en especial analizando aspectos operacionales y los que dan cabida a la gestión y verificando los elementos fácticos para poder apoyarse en todos los recursos disponibles. La participación del sector privado en materia de infraestructura pone en juego frecuentemente a nivel de las empresas toda una gama de operaciones y de estructuras complejas. Los administradores de las sociedades deben ser particularmente atentos a sus obligaciones cuando se participan en un proyecto de infraestructura. Instrumentos como los Principios de gobierno de la empresa de la OCDE pueden servir de referencia en cuanto a la responsabilidad de los administradores.

Principio 22: Los participantes del sector privado, sus subcontratistas y sus representantes no deben recurrir al soborno y a otras prácticas irregulares para obtener los contratos, aumentar el control sobre sus acciones o ganar favores, y tampoco debe aceptar ser parte en estas prácticas en el transcurso de sus operaciones en materia de infraestructura.

Uno de los principales desafíos para los participantes del sector privado que quieren comportarse de manera responsable, sobre todo en el transcurso de las primeras fases del proyecto, es la de luchar contra las prácticas corruptas o colusorias. En las zonas donde existe déficit de gobernabilidad y en los otros contextos nacionales donde la corrupción es frecuente, los procesos de atribución de los mercados de infraestructura y las prácticas reglamentarias ulteriores han suscitado críticas que han tenido a veces como efecto la degradación de la imagen de los participantes del sector privado a los ojos del público y de disminuir la "autorización social de ejercicio". En los países que hacen parte de la convención del OCDE en la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, la corrupción de agentes públicos extranjeros es una infracción penal, sea cual sea la legislación del país anfitrión. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción pide a todas las partes el incriminar la corrupción de agentes públicos extranjeros. Las empresas tendrían asimismo interés de evitar otras prácticas controversiales, incluso si no son ilícitas. El gobierno de la empresa, en particular bajo la perspectiva del control financiero y de las incitaciones salariales, está en peligro cuando se aceptan métodos ilícitos, y esto puede ser muy costoso en términos de reputación. Las empresas deben librar competencia para la obtención de los mercados de infraestructura sobre la base de méritos de sus propuestas. No deben ejercer presiones políticas sobre los Estados receptores para la apertura de los sectores, la atribución de los mercados o la modificación de las reglamentaciones.

Principio 23: Los participantes del sector privado deben contribuir con estrategias de comunicación y consulta con el público en general, incluyendo lo relativo a los consumidores, comunidades afectadas y las personas que poseen intereses corporativos, con vistas a desarrollar la aceptación mutua y el entendimiento de los objetivos de las partes involucradas.



00000076

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

La comunicación con las poblaciones que pudieran ser afectadas y con las otras partes, en relación con las consultas, son fundamentales para un comportamiento responsable de las empresas. En los primeros estados de un proyecto de infraestructura, así como lo que consiste en prioridades globales del proyecto, la consulta debe ser llevada a cabo por las autoridades públicas. Después de la atribución del mercado, los participantes públicos y privados deben comunicarse con el público y las partes involucradas, y consultarles. Además los métodos de comunicación y de consulta que utilizan las empresas dan generalmente mejores resultados cuando están asociadas con estrategias de comunicación de las autoridades públicas, sin sustituirlas. Esto vale especialmente en el caso de los proyectos de infraestructura donde el sector privado y el sector público cooperan para facilitar a la población servicios de infraestructura, y que tienen el mismo interés en facilitar intercambios de información. Las empresas deben comprender los valores sociales, económicos y ambientales de las sociedades donde operan. Entre los otros puntos generalmente aceptados, la experiencia demuestra que hay que dialogar con las poblaciones y con las otras partes involucradas en un estado suficientemente precoz de la planificación, con el fin de darle verdaderamente la posibilidad de hacerse entender. Es deseable que los participantes del sector privado adopten una actitud de gran transparencia atendiendo a los costos, exigencias de confidencialidad y otros problemas de concurrencia. Es indispensable transmitir tanta información como sea posible, en especial lo referente a las opciones tecnológicas del inversionista y de las posibilidades de localización que se le ofrecen. La tarifa de los servicios de infraestructura y los otros parámetros del proyecto que tienen un impacto directo sobre el usuario son elementos esenciales de la comunicación y de la consulta. Es necesario que los usuarios puedan tener acceso correctamente a informaciones sobre la situación financiera y técnica de las operaciones de infraestructura, así como los planes futuros de los participantes del proyecto, y que puedan expresar sus preocupaciones y sus prioridades. Sino, es probable que el público vaya a reaccionar de forma hostil a un ajuste de tarifas y a una insuficiencia de servicios en relación a lo que se esperaba, lo que puede tener desastrosas repercusiones para las partes contratantes. Los participantes del sector privado son incentivados a participar de manera activa con los financistas en la cuestión de las consecuencias ambientales y sociales de sus actividades.

Principio 24: Los participantes del sector privado, en el suministro de servicios básicos a las comunidades necesitan ser conscientes de las consecuencias de sus actos con las comunidades y por su trabajo, en conjunto con las autoridades públicas, para evitar o mitigar los resultados socialmente inaceptables.

Un aspecto fundamental, en especial en las regiones más pobres, es el acceso material y financiero de los servicios básicos. Subvencionar o no los servicios públicos de base es en definitiva una elección de los poderes públicos. En cuanto a las empresas, pueden frecuentemente considerar como legítimas contractualmente las medidas como las sanciones o la interrupción del servicio en caso de falta de pago por parte de los participantes. Es en el caso en particular cuando las empresas privadas



00000077

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

explotan equipos que son anteriores a su participación y que no asumen contractualmente la responsabilidad directa del mantenimiento y de las redes de transporte. Las empresas debieran respetar los derechos humanos de las personas involucradas en sus actividades de una manera que sea conforme a las obligaciones y a los acuerdos internacionales del país de recepción. Los participantes privados en materia de infraestructura deben ser conscientes que el rechazo y la supresión de los servicios básicos de infraestructura, por razones comerciales u otras, pueden ser percibidas como un rechazo de los derechos del hombre de las personas involucradas. Los inversionistas en infraestructura deben ser muy atentos a las preocupaciones y a estar listos para implicarse también de los participantes públicos y de las autoridades locales para responderles.

Para optimizar la participación del sector privado, las autoridades públicas deben comunicar claramente los objetivos de sus políticas en materia de infraestructura y deben poner en marcha mecanismos de consulta entre los socios públicos y privados atendiendo a estos objetivos así como los proyectos individuales.



00000078

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DECRETO NUMERO ____-2008

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala ha renovado su compromiso para fortalecer el desarrollo del país, especialmente en el área rural, la que tiene necesidades urgentes en materia de acceso a la salud, educación e infraestructura, acceso que al alcanzarse, permitirá aumentar su capacidad de generar empleos e ingresos para contribuir a la reducción efectiva de los niveles de pobreza en el país.

CONSIDERANDO:

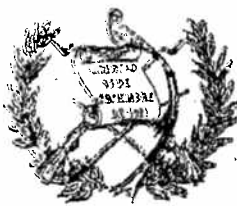
Que la realización de los proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, permitirán liberar recursos y aumentar la magnitud y calidad de la inversión, beneficiar a los sectores más dinámicos para que aumenten su productividad y competitividad, impulsar el crecimiento del país, generación de empleos y recursos fiscales adicionales, que se materializarán en un mayor grado de inversión y gasto social, actual y futuro.

CONSIDERANDO:

Que el desarrollo de un sistema efectivo y eficiente de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, requiere de un marco jurídico e institucional que garantice a la sociedad guatemalteca que la aplicación de esa modalidad de contratación, proveerá efectivamente de la infraestructura que carece Guatemala.

CONSIDERANDO:

Que es imprescindible la creación de alianzas estratégicas en donde el sector público y privado se unen para el desarrollo de objetivos, en armonía de intereses



00000079

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

CONSIDERANDO:

Que las inversiones en infraestructura por medio de alianzas para el desarrollo tienen un alto impacto en la reducción de las brechas sociales, económicas y de competitividad a largo plazo.

POR TANTO,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República.

DECRETA

La siguiente:

**LEY DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA**

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene como objeto establecer el marco normativo para la celebración y ejecución de contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. La presente ley se aplicará a los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica destinados a la creación, construcción, desarrollo, uso y goce, explotación, mantenimiento, modernización, ampliación y mejoramiento de autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos eléctricos, de desarrollo urbano y ferroviarios; así como a la prestación de servicios asociados y otros complementarios a éstos, incluyendo la provisión de los equipamientos necesarios para el cumplimiento de la presente ley y su Reglamento.



00000080

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Las municipalidades y mancomunidad de municipales podrán realizar proyectos bajo este marco legal, siempre que cuenten con las autorizaciones previas conforme las normas establecidas en el Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, en el Código Municipal.

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de interpretación de la presente ley, se entenderá por:

Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o Agencia: Es la institución especializada del Estado responsable del cumplimiento de esta Ley y su Reglamento;

Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Es el evento imprevisto por las partes al momento de la presentación de la oferta, que al ocurrir, hace físicamente y totalmente imposible el cumplimiento de todas o algunas de las obligaciones contraídas en el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, se excluye el cumplimiento de los seguros de caución.

Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o Consejo. Es la instancia colegiada, creada por esta ley, con la función de dirección superior de la Agencia;

Contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o Contrato: Es el acuerdo de voluntades jurídicamente vinculante, celebrados entre el Estado y el participante privado en el que se establecen los derechos y obligaciones para la ejecución de un proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Las bases de licitación del proyecto formarán parte integral del contrato;

Estándares Técnicos: Son las características técnicas que deben reunir las obras y servicios la operación de un proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica de Infraestructura Económica.

Fase de Construcción: Es el período de tiempo transcurrido entre la fecha de inicio del plazo para construir infraestructura económica por parte del participante privado hasta su efectiva entrega.

Fase de Explotación: Es el período de tiempo transcurrido entre la finalización de la fase de construcción del proyecto de infraestructura económica y la conclusión de la ejecución del contrato, en la fase de prestación de servicios.



00000081

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Infraestructura: instalaciones físicas y sistemas incorporados a las mismas para su buen funcionamiento, establecidos en bienes del Estado, a través de los cuales se presten directa o indirectamente servicios a la sociedad;

Infraestructura Económica: Es la base material de la economía, con la capacidad humana, política, intelectual que actúa sobre ella y con las instituciones creadas para dirigir su actuación y que comprende al conjunto de instalaciones físicas que posibilitan la actividad económica.

Institución Contratante del Estado: Es el Organismo del Estado, entidad o institución del Estado, de carácter centralizado, descentralizado o autónomo, que contrate con un participante privado la prestación o provisión de un servicio de su competencia, bajo el régimen establecido en la presente ley;

Nivel de Servicio: Es el conjunto de funcionalidades y prestaciones que una obra o servicio de un proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica deben proveer durante su fase de explotación, de conformidad con lo establecido en el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;

Ofertante: Es la persona, individual o jurídica, nacional o extranjera, que participa en el proceso de licitación para ejecutar un proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;

Participante Privado: Es la persona individual o jurídica, nacional o extranjera que haya suscrito contrato para la ejecución de un proyecto de Alianzas para el Desarrollo en Infraestructura Económica.

Proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o Proyecto: Es el conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con la finalidad de proveer servicios de infraestructura económica entre el sector público y el privado para alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población.

Régimen de licitación: Es la actuación ante la administración para ofrecer precio en una licitación, de conformidad a los requisitos y fases establecidos en la presente ley.

Sistema Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica: Es el conjunto de instituciones y sus actividades que hacen cumplir las normas de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, tanto sustantivas, como procedimentales y administrativas.



00000082

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo o de Propósito Específico: Es la persona, individual o jurídica, de nacionalidad guatemalteca cuya actividad de giro exclusivo o de propósito específico es celebrar un contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica como el participante privado que ha sido adjudicado de una licitación, en una alianza público privada con el Estado. Esta Sociedad Mercantil se formará con acciones nominativas;

● **Usuario:** persona individual o jurídica que se beneficia de un proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 4. Principios Generales. Todas las actuaciones relacionadas con las disposiciones de la presente ley deberán observar los principios generales siguientes:

- a. **Rectoría del Estado:** Las Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica se realizarán bajo el principio de que únicamente el Estado tiene rectoría, competencia y facultades de planeación, control, sanción, regulación, supervisión y vigilancia de la ejecución de los contratos respectivos, sus autoridades y dependencias.
- b. **Transparencia y Auditoría Social:** Todas las actuaciones de las Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, serán públicas y sujetas a una estricta rendición de cuentas y actos que impliquen compromisos fiscales para el Estado y efectos sobre los usuarios.
- c. **Rentabilidad Social:** Toda Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica en los proyectos, deberá responder a la materialización del bien común, estableciendo con claridad los objetivos generales y beneficios que el Estado pretende proporcionar a los habitantes.
- d. **Eficiencia Económica:** Los mecanismos contemplados sobre las Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica deberán ser aprobados sólo cuando se compruebe, mediante estudios de prefactabilidad, factibilidad y dictámenes técnicos, que éstos constituyen una opción eficiente, eficaz y sostenible para la construcción de la obra y la prestación del servicio.
- e. **Distribución de Riesgos:** Los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, deberán establecer, en forma expresa, para situaciones específicas y



00000083

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

acordadas, los riesgos que asumen específicamente el Estado y el participante privado, para identificar quien se encuentra en mejor posición de competencias para evitarlos o mitigarlos.

- f. Competencia de los participantes privados: consiste en el proceso de participación competitivo de los interesados en un proyecto de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura, previo a la adjudicación, que permita escoger al participante privado que pueda prestar el servicio más eficiente.
- g. Seguridad Jurídica: Es el principio que reconoce la certeza del Derecho. Es de interés público el cumplimiento irrestricto de las obligaciones a que den lugar los actos y contratos amparados bajo la presente ley. Las partes contratantes que incurran en incumplimiento o alteración de las estipulaciones de cualquiera de los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, serán responsables por los daños y perjuicios causados de conformidad a la legislación vigente, y deberán de ser sancionados conforme a la misma.
- h. Temporalidad: Todo contrato deberá contemplar un plazo máximo, el que en ningún caso, incluyendo sus prórrogas, podrá exceder de cuarenta (40) años. La omisión de la estipulación del plazo máximo en el contrato lo hace nulo.
- i. Responsabilidad Fiscal: Para la inversión que se realice a través de contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, debe considerarse la capacidad de pago del Estado para atender los compromisos financieros que se deriven de la ejecución de los proyectos. Los contratos que conlleven compromisos de pago futuros por parte del Estado, al participante privado o a terceros, dentro del marco del contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica serán considerados como deuda pública, por lo que para el efecto se deberán de cumplir los requisitos previos de ley.
- j. Fiscalización: Es la verificación efectiva para que se cumplan los compromisos adquiridos por medio del contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, adicional a la supervisión de la institución contratante del Estado, que tiene la responsabilidad de administrar el contrato, así como de la fiscalización del órgano contralor del Estado.

TÍTULO II

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA



00000084

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

CAPÍTULO I

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 5. Sistema Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. El Sistema Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica es el conjunto de actores públicos y privados y sus relaciones, que participan en forma directa e indirecta en los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, siendo éstos:

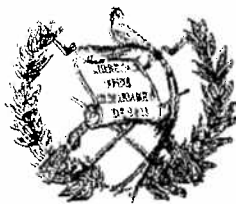
- a) Las Instituciones Contratantes del Estado;
- b) La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- c) El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura;
- d) La Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica,
- e) La Dirección de Fiscalización de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- f) Los Inspectores de Proyectos;
- g) Las Comisiones de Revisión y Evaluación;
- h) Las Comisiones Arbitrales Adhoc; y,
- i) El Congreso de la República.

En el ámbito privado los participantes privados, los subcontratistas, las entidades financieras, los Tribunales Arbitrales Internacionales, los Organismos Multilaterales e instituciones que contraten seguros de conformidad con lo que establece esta ley.

Artículo 6. La Institución Contratante del Estado y sus Responsabilidades. La Institución Contratante del Estado es el Organismo, entidad o institución del Estado, de carácter centralizado, descentralizado o autónomo, que contrate, con un participante privado, la construcción o la prestación o provisión de un servicio de su competencia, bajo el régimen establecido en la presente ley

La Institución Contratante del Estado tendrá las responsabilidades siguientes:

- a) Coordinar sus acciones, en materia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, con el Consejo y la Agencia, durante todo el período que se extienda la evaluación y proposición



00000085

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

de un proyecto, hasta la selección del participante privado y la suscripción del contrato respectivo.

Los mecanismos específicos de coordinación institucional y los derechos y obligaciones correspondientes a la Institución contratante del Estado durante ese período, se establecen en esta ley y su Reglamento.

- b) En su calidad de parte contractual del contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, administrar el contrato y coordinar con la Agencia durante todo el período de construcción del proyecto y de explotación del mismo.
- c) Sancionar al participante privado por incumplimiento de las obligaciones de los compromisos establecidos en la ley, el reglamento de esta ley, las bases de licitación y el contrato, sin perjuicio de las competencias de la Dirección de Fiscalización de la Agencia en esta materia.

Artículo 7. Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Se crea la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), como una entidad descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 8. Funciones de la Agencia. Son funciones de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE):

- a) Elaborar y coordinar con las autoridades competentes, los planes, políticas y normas para el desarrollo y buen funcionamiento de la modalidad de contratación de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica regida por esta ley, con la institución contratante del Estado.
- b) Velar por la correcta utilización y ejecución de los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica por parte de las instituciones del Estado que se interesen en contratar a través de esta modalidad de contratación.
- c) Asesorar, cuando ésta lo requiera, a la Institución Contratante del Estado en la implementación de esta ley y en todo lo que corresponda de los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Artículo 9. Órganos. Son Órganos de la ANADIE:

- a) El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, quien la dirige;
- b) La Dirección Ejecutiva;
- c) La Dirección de Fiscalización.



0000000000

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

El Reglamento de esta ley establecerá la organización interna de la Agencia y fijará las funciones y atribuciones correspondientes.

Artículo 10. Del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo. El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE) estará integrado por:

- a. El Ministro de Finanzas Públicas, quien lo preside;
- b. El Ministro de Economía;
- c. El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda;
- d. El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia de la República - SEGEPLAN-;
- e. El Director Ejecutivo de la Agencia Invest In Guatemala/Invierte en Guatemala;
- f. El Director Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-;
- g. Un Ingeniero Civil;
- h. Un Economista;
- i. Un Abogado y Notario;
- j. Un Auditor y Contador Público con postgrado en finanzas;
- k. El Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República.

Los funcionarios descritos de la literal a) a la ~~f~~^g), deberán nombrar a un suplente, el que deberá durar el período para el que haya sido nombrado.

Los funcionarios descritos de la literal g) a la j) no podrán tener suplente.

El Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República participará en el CONADIE durante el tiempo que dure en el cargo para el que fue electo y no tendrá suplente.



00000087

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

En el CONADIE podrá participar, por invitación, el titular de la Institución Contratante del Estado del proyecto o contrato que esté en discusión por parte del Consejo.

El Director Ejecutivo formará parte del Consejo, con voz pero sin voto.

Artículo 11. Requisitos. Los profesionales descritos de la literal g) a la j) del artículo 10 de la presente ley, deberán ser de reconocido prestigio y con conocimientos y experiencia acreditados por diez años como profesional universitario colegiado activo.

Artículo 12. Elección. Los profesionales descritos de la literal g) a la j) del artículo 10 de la presente ley, serán electos de la postulación de quienes cumplan con los requisitos, dentro de un proceso público convocado y dirigido por el Colegio Profesional que corresponda.

Estos profesionales podrán ser reelectos, respetando el mismo procedimiento anterior.

Artículo 13. Toma de posesión. Los miembros del Consejo, deberán tomar posesión dentro de los diez días siguientes a su nombramiento o elección.

Artículo 14. Duración en el cargo. Durarán en su cargo del CONADEI:

- a) Los titulares de las instituciones de la literal a) a la f) y de la literal k) el tiempo de vigencia de su nombramiento o elección.
- b) Los titulares profesionales descritos de la literal g) a la j) durarán cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos mediante el mismo procedimiento de elección descrito en el artículo 12 de la presente ley.

Los miembros del Consejo identificados en las literales g), h), i) y j) del artículo 10 de la presente ley, deberán actuar individualmente, con absoluta independencia técnica y administrativa.

Artículo 15. Impedimentos. Los funcionarios identificados en las literales g), h), i) y j) del artículo 10 de la presente ley tendrán impedimento para integrar el Consejo de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, por los motivos siguientes:

- a) Cuando posean interés directo o indirecto en los proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o estar relacionado con empresas que sean parte de algún contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica celebrado de conformidad a la presente ley;



00000088

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- b) Cuando sean o hayan sido expertos o árbitros en controversias de contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica u otras situaciones similares que impliquen conflicto de interés.

Los integrantes del Consejo que, con posterioridad a su designación, incurrieren en cualesquiera de las causales o impedimentos indicados en este artículo o le sobreviniere una de ellas, serán removidos inmediatamente de su cargo, por resolución fundada del Consejo y serán remplazados de conformidad al mecanismo de designación correspondiente. Si se establece que los funcionarios incurrieron en un delito, el Consejo deberá de presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes.

El nuevo funcionario designado deberá concluir el período para el cual fue seleccionado el funcionario destituido, pudiendo ser reelecto de conformidad al mecanismo establecido en el artículo 12 de la presente ley.

Para el caso de los miembros del CONADEI identificados en las literales a), b), c), d), e), f) y k) del artículo 10 de la presente ley, éstos deberán presentar declaración jurada de no tener impedimento, por proyecto o contrato que conozca el Consejo. En el caso que si lo tenga, deberá abstenerse de participar en el conocimiento o deliberación del proyecto o contrato que se trate.

El incumplimiento o inobservancia del contenido del párrafo anterior será considerado como delito y sancionado conforme a la ley.

Artículo 16. Funciones generales y específicas del Consejo. Al Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE) le corresponde las funciones siguientes:

- a) Elaborar la política nacional y ejecutar el plan de acción de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- b) Aprobar los proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento;
- c) Aprobar los estudios de prefactibilidad de los proyectos, así como las bases de licitación, incluyendo el modelo económico financiero de los mismos;
- d) Aprobar el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica para presentarlo a consideración del Presidente Constitucional de la República, quien deberá trasladarlo para conocimiento y aprobación del Congreso de la República.
- e) Definir la procedencia o improcedencia de realizar una nueva licitación, cumplido el plazo de vigencia de un contrato;



00000089

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- f) Convocar a una nueva licitación, en caso de incumplimiento grave del participante privado por el período que reste al contrato, previo al procedimiento específico;
- g) Decidir la finalización anticipada de un contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, con la asunción de las responsabilidades que de ella se deriven;
- h) Aprobar los reglamentos y disposiciones internas que faciliten y garanticen el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Agencia, incluyendo los que regulan la estructura organizacional, el régimen laboral exento del servicio civil; así como los nombramientos, remociones, ascensos, remuneraciones y contrataciones del personal, dentro de la carrera profesional del servidor público en Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- i) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Agencia, así como sus modificaciones;
- j) Fiscalizar la correcta ejecución y liquidación del presupuesto anual de ingresos y egresos de la Agencia, el que deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo de treinta días contados a partir de su aprobación por el Congreso de la República;
- k) Presentar un informe anual y circunstanciado ~~del~~ ^{al} Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, del presupuesto detallado ordinario y extraordinario con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos; así como todo lo relacionado a los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, celebrados bajo la modalidad establecida en la presente ley;
- l) Presentar memoria de labores anualmente y los informes específicos que le sean requeridos, al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República;
- m) Atender las demás funciones o atribuciones que la ley le asigne.

Artículo 17. Secretario del Consejo. El Director Ejecutivo de la Agencia actuará como Secretario del Consejo.

Artículo 18. Convocatoria. Las sesiones ordinarias del Consejo serán convocadas por el Presidente del Consejo, por lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria, las veces que sea necesario.

Artículo 19. Quórum. Se entenderá que existe quórum cuando estén presentes la mitad más uno de los miembros que integran el Consejo.



00000090

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Sin embargo, en el caso de falta del quórum establecido en este artículo, la reunión se realizará una hora después con los miembros presentes del Consejo, dejando constancia de ello en acta, pero no podrán tomar decisiones vinculadas a las literales a), b), c), d), e), f), g) e i) del artículo 16 de la presente ley.

Podrán participar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo, con voz pero sin voto, el Director Ejecutivo en su calidad de Secretario del mismo, el Subdirector que represente a la Dirección Ejecutiva y el Director de Fiscalización.

Artículo 20. Decisiones. Las decisiones del Consejo serán válidas si concurre el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

En caso de empate en una votación, el Presidente del Consejo tendrá derecho a voto doble.

Artículo 21. Responsabilidad de los Miembros del Consejo. Las funciones del Consejo no son delegables y se ejercen en forma colegiada.

Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, los miembros del Consejo responderán de forma solidariamente mancomunada, por los daños y perjuicios derivados de sus acciones u omisiones dolosas o culposas, excepto si hacen constar sus objeciones en acta de la sesión respectiva, razonando su voto adverso.

Artículo 22. Procedimiento para Deducir Responsabilidades. Los miembros titulares del Consejo podrán iniciar proceso de exclusión de alguno de sus integrantes, cuando en ejercicio de su cargo se sospeche de la comisión de infracción administrativa, tráfico de influencias o interés directo o indirecto en los asuntos que son de su conocimiento. Para el efecto, una vez probada la infracción, las dos terceras partes de sus miembros resolverán lo pertinente, sin que exista recurso alguno para impugnar la decisión.

Si en el transcurso del procedimiento se evidenciara sospecha de la comisión de un delito, deberá continuarse con el trámite del proceso de exclusión respectivo, sin perjuicio de denunciar de manera inmediata el hecho ante el Ministerio Público y presentar querrela ante los Tribunales de Justicia competentes.

Previo a la resolución de exclusión de alguno de sus miembros, se deberá agotar el debido proceso y en el transcurso de ese procedimiento, el sometido al mismo no podrá participar en ninguna reunión ni decidir respecto a algún asunto de competencia de la Agencia y de las funciones del Consejo.

Los Organismos del Estado deberán de prestar su colaboración oportuna para sustituir, en el menor plazo posible, a los miembros titulares que hayan sido excluidos.



000000091

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Todo lo adicional al procedimiento para deducir responsabilidades se definirá en el reglamento de la presente ley.

Artículo 23. Dietas. Los miembros del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE) percibirán una dieta por su participación, la cual será establecida en el Reglamento de la presente ley.

Artículo 24. De la Dirección Ejecutiva. Sin perjuicio de las atribuciones que esta ley confiere directamente al Consejo, corresponden a la Dirección Ejecutiva de la Agencia las funciones y atribuciones siguientes:

- a) Realizar las actividades necesarias dentro del proceso que originen las instituciones contratantes del Estado, para realizar proyectos de alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, de conformidad a la modalidad contractual que rige esta ley.
- b) Elaborar y someter a consideración y aprobación del Consejo, los modelos de contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, de conformidad a cada iniciativa que se le proponga;
- c) Promover el mecanismo de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, en las instituciones públicas competentes para prestar los servicios priorizados con el Consejo;
- d) Promover el mecanismo de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y las carteras de proyectos entre los inversionistas y financistas potenciales y en la comunidad en general;
- e) Nombrar, posterior a la aprobación del Consejo, a los miembros de las Comisiones de Evaluación para los procesos de licitación;
- f) Participar en la supervisión con la Institución Contratante del Estado, de la correcta ejecución de los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su Reglamento;
- g) Publicar por cualquier medio masivo y electrónico, así como en la página web de la Agencia, todas las actuaciones y resoluciones relacionadas con los proyectos, los contratos y su ejecución;
- h) Actuar coordinadamente con las instituciones contratantes del Estado para el correcto desarrollo y prestación de los servicios contratados, bajo la modalidad establecida en la presente ley;



00000092

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- i) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de conformidad a esta ley, su Reglamento y las resoluciones del Consejo;
- j) Velar porque en los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, quede debidamente estipulada la adquisición de fianzas, garantías o seguros de acuerdo a lo establecido en la presente ley y a la distribución de riesgos que se determinen en las bases de licitación y en el contrato respectivo;
- k) Mantener una amplia política de información pública y de rendición de cuentas a la sociedad guatemalteca; y,
- l) Las demás que le asigne la ley y su Reglamento y las resoluciones del Consejo.

Artículo 25. Del Director Ejecutivo. La administración de la Agencia corresponderá al Director Ejecutivo, quien será designado por el Consejo, por mayoría absoluta de sus miembros, mediante resolución fundada, a través de un procedimiento competitivo de oposición, por un período de seis años, con posibilidad de reelección para cuyos efectos deberá participar en el proceso de elección y resultar electo.

El proceso de elección se iniciará con una convocatoria pública, en la que podrán postularse quienes reúnan los requisitos siguientes:

- a) Ser guatemalteco;
- b) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles;
- c) Ser profesional colegiado activo, de reconocida honorabilidad; y,
- d) Tener diez años de experiencia profesional relevante y de reconocido prestigio en las disciplinas relacionadas con los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

El Director Ejecutivo podrá ser removido de su cargo por razones fundadas con el voto de tres cuartos de los miembros titulares del Consejo, debiéndose iniciar el proceso de remoción, notificándole al Director Ejecutivo por escrito las razones del mismo, contenidos en una resolución de trámite, adjuntándole los documentos e individualizando las pruebas que las apoyan, convocándole a una audiencia oral para desacreditar los cargos y ofrecer las pruebas de descargo que considere oportunas.

Todo lo relativo al proceso de remoción se establecerá en el reglamento de la presente ley.



00000093

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 26. Impedimentos. No podrá ser nombrado Director Ejecutivo quien:

- a) Tenga antecedentes penales o haya sido condenado en juicio de cuentas;
- b) Tenga conflicto de intereses con ofertantes o participantes privados;
- c) Sea parte o tenga interés en algún litigio, acto, contrato o garantías vinculados con la suscripción o ejecución de contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o esté relacionado con sociedades que se encuentren en la situación descrita;
- d) Tenga parientes, dentro de los grados de ley, interés directo o indirecto en proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- e) Tenga parentesco dentro de los grados de ley con algún participante privado;
- f) Sea pariente dentro de los grados de ley, de la autoridad superior de la Institución contratante del Estado;
- g) Haya aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes;
- h) Sea socio o partícipe de algún participante privado.

Si la persona nombrada como Director Ejecutivo ejerciera algún otro cargo público, deberá renunciar al mismo dentro de los diez días siguientes de haber sido nombrado. En caso contrario, no podrá tomar posesión y el Consejo deberá nombrar un nuevo Director Ejecutivo, de conformidad al procedimiento establecido en esta Ley. Se exceptúan los cargos de instrucción académica.

Si en el transcurso del ejercicio del cargo como Director Ejecutivo se presenta una de las limitantes definidas en el presente artículo, el Director Ejecutivo deberá de hacerlo de conocimiento inmediato del Consejo, para que este decida sobre la situación. En el caso que el Director Ejecutivo omitiera presentar el caso ante el Consejo, se considerará como causal suficiente para su remoción inmediata.

Artículo 27. Funciones y Responsabilidades. El Director Ejecutivo será el jefe superior de la Dirección Ejecutiva y ejercerá sus funciones de conformidad con el contenido de la presente ley, su reglamento y las directrices e instrucciones que dicte el Consejo.

El Director Ejecutivo tendrá la administración y representación legal de la Agencia y será responsable penal, civil y administrativamente por las acciones u omisiones en que incurra en el ejercicio de su cargo.



00000094

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Corresponderá además al Director Ejecutivo:

- a) Representar legalmente a la Agencia y fungir como Secretario del Consejo.
- b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Consejo y del Presidente del mismo, en las materias de su competencia y realizar los actos y funciones que éstos le deleguen en el ejercicio de sus atribuciones y lo que establece esta ley y su Reglamento;
- c) Requerir de las instituciones del Estado la información y antecedentes que estime necesarios y que guarden relación con su respectiva esfera de competencia;
- d) Preparar el proyecto de presupuesto de la Agencia para someterlo al Consejo, y proponer las modificaciones presupuestarias que se requieran;
- e) Proponer al Consejo aquellos aspectos relativos a la organización interna de la Dirección Ejecutiva y sus modificaciones;
- f) Asistir con derecho a voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo;
- g) Informar periódicamente al Consejo, y cuando se le requiera, acerca de los avances de la institución y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones;
- h) Designar y contratar personal y poner término a sus servicios, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia se le confieren al Consejo, todo de conformidad con las disposiciones que se establezcan en el Reglamento respectivo;
- i) Realizar aquellos actos de administración necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Agencia;
- j) Administrar los recursos destinados al cumplimiento de las funciones de la Agencia;
- k) Delegar, sin eximir responsabilidad, parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios de la Dirección Ejecutiva;
- l) Vincularse técnicamente con las instituciones internacionales dedicadas al ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras instituciones;



00000095

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- m) Someter a consideración del Consejo, todas aquellas materias que requieran de su aprobación o resolución;
- n) Asumir las demás funciones o atribuciones que la ley le encomiende.

Si la persona nombrada como Director Ejecutivo ejerciera algún otro cargo público, excepto lo relacionado a la docencia universitaria, deberá renunciar al mismo dentro de los diez días siguientes de haber sido nombrado y antes de tomar posesión. En caso contrario, no podrá tomar posesión y el Consejo deberá nombrar un nuevo Director Ejecutivo, respetando el procedimiento establecido en esta ley para el efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el ámbito de competencia del Director Ejecutivo no alcanzará la fiscalización del contrato en el período de explotación, la que corresponderá exclusiva al Director de Fiscalización.

Artículo 28. De la Dirección de Fiscalización. La función de fiscalización en la fase de explotación de la obra o prestación del servicio corresponderá a la Dirección de Fiscalización. Esta dirección garantizará el cumplimiento de los niveles de servicio y los estándares técnicos comprometidos en los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica durante el período de explotación y promoverá y protegerá el ejercicio de los derechos de los usuarios establecidos en los contratos.

La Dirección de Fiscalización emitirá los informes que se le requieran, referidos a las funciones que la ley le asigna y velará por que exista acceso expedito a información veraz, oportuna y actualizada con relación a los servicios contratados, en su fase de explotación.

Artículo 29. Del Director de Fiscalización. El Director de Fiscalización será el responsable de la Dirección de Fiscalización, será designado por el Consejo, por mayoría absoluta de sus miembros, mediante resolución fundada a través de un procedimiento competitivo, por un periodo de seis años, con posibilidad de reelección para cuyos efectos deberá participar en el proceso de elección y resultar electo.

El proceso de elección se iniciará con una convocatoria pública, en la que podrán postularse quienes reúnan los requisitos siguientes:

- a) Ser guatemalteco;
- b) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles;
- c) Ser profesional colegiado activo, de reconocida honorabilidad; y,



00000096

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- d) Tener diez años de experiencia profesional relevante y de reconocido prestigio en las disciplinas relacionadas con los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

El Director de Fiscalización podrá ser removido de su cargo por razones fundadas con el voto de tres cuartos de los miembros titulares del Consejo, debiéndose iniciar el proceso de remoción, notificándole al Director de Fiscalización por escrito las razones del mismo, contenidos en una resolución de trámite, adjuntándole los documentos e individualizando las pruebas que las apoyan, convocándole a una audiencia oral para desacreditar los cargos y ofrecer las pruebas de descargo que considere oportunas.

Todo lo relativo al proceso de remoción se establecerá en el reglamento de la presente ley.

Artículo 30. Impedimentos. No podrá ser nombrado Director de Fiscalización quien:

- a) Tenga antecedentes penales o haya sido condenado en juicio de cuentas;
- b) Tenga conflicto de intereses con ofertantes o participantes privados;
- c) Sea parte o tenga interés en algún litigio, acto, contrato o garantías vinculados con la suscripción o ejecución de contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o esté relacionado con sociedades que se encuentren en la situación descrita;
- d) Tenga parientes, dentro de los grados de ley, interés directo o indirecto en proyectos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica;;
- e) Tenga parentesco dentro de los grados de ley con algún participante privado;
- f) Sea pariente dentro de los grados de ley, de la autoridad superior de la Institución contratante del Estado;
- g) Haya aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes;
- h) Sea socio o partícipe de algún participante privado;

Si la persona nombrada como Director de Fiscalización ejerciera algún otro cargo público, deberá renunciar al mismo dentro de los diez días siguientes de haber sido nombrado. En caso contrario, no podrá tomar posesión y el Consejo deberá nombrar un nuevo Director de Fiscalización, de conformidad al procedimiento establecido en esta Ley. Se exceptúan los cargos universitarios.



00000097

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

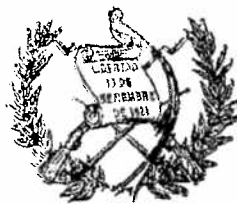
Si en el transcurso del ejercicio del cargo como Director de Fiscalización se presenta una de las limitantes definidas en el presente artículo, el Director de Fiscalización deberá de hacerlo de conocimiento inmediato del Consejo, para que este decida sobre la situación. En el caso que el Director de Fiscalización omitiera presentar el caso ante el Consejo, se considerará como causal suficiente para su remoción inmediata.

Artículo 31. Funciones y Responsabilidades. El Director de Fiscalización será el jefe superior de la Dirección de Fiscalización y ejercerá sus funciones de conformidad con esta ley, su reglamento y las directrices e instrucciones que dicte el Consejo.

El Director de Fiscalización será responsable penal, civil y administrativamente por las acciones u omisiones en que incurra en el ejercicio de su cargo.

Corresponderá además al Director de Fiscalización:

- a) Participar, con voz pero sin voto, en las reuniones del Consejo de la Agencia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- b) Cumplir y hacer cumplir la ley y su reglamento, así como los acuerdos e instrucciones del Consejo y del Presidente del mismo, en las materias de su competencia y realizar los actos y funciones que éstos le deleguen en el ejercicio de sus atribuciones;
- c) Dirigir la fiscalización de los niveles de servicio y verificar el cumplimiento de los estándares técnicos pertinentes, de conformidad con las leyes atinentes y el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- d) Requerir de las instituciones contratantes del Estado la información y antecedentes que estime necesarios y que guarden relación con sus respectivas esferas de competencia;
- e) Proponer al Consejo aquellos aspectos relativos a la organización interna de la Dirección de Fiscalización y sus modificaciones;
- f) Informar periódicamente al Consejo, y cuando se le requiera, acerca de los avances de la Dirección de Fiscalización y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones;
- g) Realizar aquellos actos de administración necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Fiscalización;
- h) Administrar los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones;



00000098

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- i) Vincularse técnicamente con las instituciones internacionales dedicadas al ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras instituciones;
- j) Someter a consideración del Consejo, todas aquellas materias que requieran de su aprobación o resolución;
- k) Coordinar sus actividades y funciones con el Órgano Contralor del Estado;
- l) Asumir las demás funciones o atribuciones que esta ley y el Reglamento le encomiende.

Sin perjuicio de lo anterior, el ámbito de competencia del Director de Fiscalización no alcanzará la fase de construcción del proyecto, la que corresponderá exclusivamente al Director Ejecutivo.

Artículo 32. Presupuesto y Fondo de Capital Privativo. La Agencia contará con los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado por el Congreso de la República.

Se crea un fondo de capital privativo para la promoción y desarrollo de las iniciativas de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, el que se capitalizará con el cargo del uno por ciento (1%) calculados en base al valor de los proyectos que se adjudiquen al participante privado.

Este fondo se capitalizará además con:

- a) Los intereses que generen los recursos financieros;
- b) Las transferencias que el Organismo Ejecutivo realice a su favor, debidamente autorizadas;
- c) Las donaciones de organismos internacionales; y,
- d) Cualquier otro ingreso que le autorice captar la ley.

Dichos recursos se invertirán únicamente en estudios de preinversión, pago de contingencias, gastos de funcionamiento de la Agencia y derechos de vía de proyectos de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Hasta el diez por ciento (10%) de los recursos ingresados anualmente al fondo, podrán ser utilizados para gastos de administración de la Agencia, debiendo ser previamente autorizado por el Consejo.



00000099

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Hasta un cincuenta por ciento (50%) de los recursos ingresados anualmente al fondo, deberán ser utilizados para el pago de compromisos y contingencias establecidos explícitamente por el Estado en las bases de licitación y en los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

En los años en que no existan erogaciones suficientes en proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, dichos recursos o el excedente de los mismos se constituirán en una reserva para el cumplimiento de las obligaciones a futuro.

Los recursos del fondo se invertirán exclusivamente en títulos de deuda pública de la República de Guatemala.

El Reglamento definirá las reglas de financiamiento del fondo.

Artículo 33. Registro Público de Proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Se crea dentro de la Agencia, el Registro Público de Proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, donde se registrarán todos los proyectos que se ejecuten o se hubieren ejecutado bajo la modalidad de contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

El registro tendrá un carácter público, y la Agencia deberá garantizar acceso expedito a la información en él registrada, a través de medios electrónicos y de su página web.

En este Registro se deberán inscribir las bases de licitación y adjudicación y los contratos, las prendas especiales establecidas en esta ley, así como los proyectos improbados, proyectos aprobados, proyectos ejecutados, precalificado de licitantes; precalificados de consultorías y asesorías; peritos; árbitros; de proveedores.

El Reglamento del Registro normará al mismo y determinará los procedimientos y requisitos de inscripción, en congruencia con lo que determina esta ley.

Artículo 34. Compromisos Presupuestarios. En los casos que el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, estipule pagos al participante privado que excedan de un ejercicio fiscal, por concepto de la inversión, cada Institución contratante del Estado deberá incluir en su proyecto de presupuesto de inversión para cada ejercicio fiscal durante el plazo de vigencia del contrato, la asignación equivalente al pago estipulado, deduciendo el pago programado por el fondo de capital privativo para dicho año.

Los compromisos presupuestarios de años futuros derivados de las obligaciones de pagos futuros de los proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, deberán enmarcarse y plenamente identificados dentro de la autorización de endeudamiento público que se establezca en el **Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de cada año.**



00000100

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 35. Convenio de Mandato. El convenio de mandato faculta al mandante o institución contratante del Estado a otorgar a favor de la Agencia el derecho de someter al procedimiento de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y explotación y conservación de proyectos de conformidad con esta ley y su Reglamento, así como otorgarle a la Agencia las facultades, derechos y obligaciones que determinan esta ley y su Reglamento.

La Agencia será competente para realizar los procedimientos previos al otorgamiento de los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica con la Institución Contratante del Estado. Las entidades descentralizadas o autónomas para otorgar el convenio mandato, deberán contar con la previa aprobación de su autoridad superior.

CAPÍTULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE PRIVADO

Artículo 36. Derechos y Obligaciones del Participante Privado. El participante privado tendrá los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los demás establecidos en la presente ley y su Reglamento, bases de licitación y el contrato:

- a. Constituir una sociedad mercantil guatemalteca con acciones nominativas, de giro exclusivo, con el capital propio mínimo establecido en las bases de licitación, sometido a auditoría periódica, dentro de los 30 días siguientes a la adjudicación del contrato;
- b. Ejecutar la obra contratada asumiendo los riesgos establecidos en el contrato e invirtiendo lo necesario para cumplir con las obligaciones contraídas.
- c. Percibir como única compensación por la ejecución del contrato, los pagos e ingresos por servicios convenidos en éste;
- d. Cumplir con las obligaciones, niveles de servicio, estándares y especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación, el contrato, la presente ley y otras leyes relacionadas;
- e. Realizar cualquier operación lícita propia de su propósito específico sin necesidad de autorización previa de la Agencia, con las solas excepciones que regula expresamente esta ley y su Reglamento y las que se estipulen en el contrato;



00000101

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- f. Gozar de prórroga en los plazos totales o parciales del contrato, cuando el retraso de los mismos sea imputable al Estado, debiendo en ese caso incrementarse los plazos a periodos iguales al retraso o paralización, sin perjuicio de las compensaciones que procedan;
- g. Acatar las resoluciones emitidas por la Institución contratante del Estado y por la Agencia;
- h. Permitir y facilitar las inspecciones y auditorías que tengan por objeto verificar el desempeño en la ejecución del proyecto y comprobar el cumplimiento de las condiciones de calidad, compensaciones económicas y adecuación técnica de éstos, en los términos que se definen en el Título V de esta ley;
- i. Entregar a la Agencia sus estados financieros auditados por una empresa externa para que se publiquen a través de los medios electrónicos de la Agencia, cada vez que ésta los solicite;
- j. Presentar a la Agencia informes sobre el desarrollo y ejecución del contrato en las condiciones formales y temporales fijadas en las bases de licitación, el contrato, la presente ley y su Reglamento;
- k. Cumplir con las leyes del país, especialmente con las disposiciones laborales, ambientales y tributarias;
- l. Responder por la pérdida o deterioro de los bienes del Estado involucrados en el contrato adjudicado;
- m. Transferir íntegramente el contrato, una vez que se encuentre en plena prestación el servicio contratado. Esta transferencia sólo podrá hacerse a la persona que cumpla los requisitos establecidos en las bases de licitación, previa aprobación de la Institución Contratante del Estado y del Consejo de la Agencia. Estos tendrán un plazo máximo de sesenta días para autorizar o denegar la transferencia. De no pronunciarse en este período, se entenderá que ambas instituciones han aprobado la transferencia;
- n. Realizar las actividades necesarias para desarrollar las obras y proveer los servicios por sí misma o a través de terceros contratistas.
- o. Formalizar y registrar los contratos de sus subcontratistas previo iniciar obras y servicios.
- p. Subcontratar, sin embargo, los contratos que celebre deberán incluir en el contrato cláusula arbitral para resolver las controversias que se susciten, las que no podrán superar un plazo de 30 días.



00000102

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

TÍTULO III

DE LA LICITACIÓN

CAPÍTULO I

ACCIONES PREVIAS AL RÉGIMEN DE LICITACIÓN

Artículo 37. Autorizaciones previas de la institución contratante del Estado. Todo proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, será precedido del requerimiento y autorizaciones escritas de la institución contratante del Estado por parte de sus autoridades superiores y sometido a consideración y aprobación del Consejo de la Agencia.

Artículo 38. Admisibilidad del requerimiento de la Institución contratante del Estado por parte del Consejo de la Agencia. El Consejo emitirá providencia de recepción de la solicitud de la institución contratante del Estado, dentro de la reunión siguiente a la fecha de la presentación de la misma, estableciendo en la misma, las fases pertinentes que deberá agotar la solicitud, con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto basado en la priorización que indiquen las políticas y programas de Gobierno.

Artículo 39. Estudios Previos. Una vez priorizado un proyecto, el Consejo fijará la realización de los estudios de impacto ambiental y económico-financiero y los que se consideren necesarios según el tipo de proyecto, fijando para su entrega un plazo prudencial.

Artículo 40. Recepción de los estudios técnicos por parte del Consejo. Una vez recibidos los estudios técnicos instruidos por el Consejo, éste deberá analizar y disponer mediante resolución fundada la conveniencia para el Estado de realizar la obra o el servicio de conformidad a contratación de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica que regula esta ley.

Los estudios deberán determinar el impacto presupuestario financiero en los períodos de ejercicio fiscal durante los cuales se desarrollará el contrato, y los compromisos fiscales futuros, deberán estar dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Congreso de la República.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LICITACIÓN



00000103

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 41. Régimen de Licitación. Realizados y obtenidos los estudios previos establecidos en el Capítulo anterior, la Agencia junto con la Institución Contratante del Estado iniciará el régimen de licitación de conformidad con la presente ley.

Si la resolución es desfavorable, se trasladará el expediente al Registro de la Agencia, donde estará a disposición pública.

Artículo 42. Elaboración y Aprobación de las Bases de Licitación. La Agencia, en coordinación con la Institución contratante del Estado en la forma establecida en el Reglamento de la presente ley, deberá elaborar y aprobar el contenido de las bases de licitación. Las bases de licitación deberán contener las especificaciones del proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que establezcan las estipulaciones sustanciales y objetivas que deben integrar el contrato.

Artículo 43. Publicidad y Participación. Las licitaciones, sin excepción, tendrán carácter público internacionales y podrán presentarse a ellas las personas nacionales y extranjeras que cumplan con lo establecido en las bases de licitación, la presente ley, su Reglamento y la legislación complementaria vigente.

Artículo 44. Prohibiciones. Tienen prohibido ofertarle al Estado y celebrar contratos como participantes privados y subcontratistas, las personas individuales o jurídicas, cuyos integrantes o representantes legales estén contemplados en los casos siguientes:

- a. Quienes estén privados del goce de sus derechos civiles por sentencia firme;
- b. El Presidente, Vicepresidentes, Secretarios y Subsecretarios de Estado, Ministros y Viceministros, Directores Generales, Gerentes de los Organismos de Estado y sus parientes dentro de los grados de ley;
- c. Las autoridades de las entidades descentralizadas, autónomas o municipales y sus parientes dentro de los grados de ley;
- d. Los funcionarios y servidores públicos de la institución contratante del Estado involucrados, según la materia que trate el proyecto;
- e. Los directores, subdirectores, funcionarios y servidores públicos de cualquier otra dependencia, entidad o institución fuera de las nombradas, que dependan directa o indirectamente del Organismo Ejecutivo en proyectos de Alianzas para el Desarrollo en que esté involucrada la respectiva institución;



00000104

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- f. Quienes hayan intervenido directa o indirectamente en la elaboración, revisión o aprobación de las bases de licitación y sus parientes dentro de los grados de ley;
- g. Las personas jurídicas cuyos socios o representantes legales estén comprendidos en algunos de los casos a que hacen referencia las literales anteriores de este artículo;
- h. Los funcionarios y servidores públicos de la Agencia y sus parientes dentro de los grados de ley.

Artículo 45. Bases de Licitación. Las bases de licitación contendrán como mínimo, lo siguiente:

- a. Descripción general y objetivos del proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- b. Condiciones para la presentación de la oferta, entre ellas acreditar su capacidad legal, técnica y financiera;
- c. Descripción precisa de los resultados que se esperan del contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- d. Criterio, metodología y ponderación que aplicará la Comisión de Evaluación, para evaluar la propuesta técnica y la oferta económica de los ofertantes;
- e. Plazos máximos de la contratación, y las condiciones mínimas iniciales para una renovación;
- f. Causales de terminación del contrato;
- g. Condiciones económicas y financieras de la contratación y la forma cómo el participante privado será retribuido;
- h. Listado de documentos originales o fotocopias legalizadas de éstos, que deben incluirse en la plica en original, copias requeridas;
- i. Indicación de los requisitos fundamentales para la participación del ofertante y demás requisitos que debe contener la oferta;
- j. Declaración jurada del ofertante que no es deudor moroso del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, municipalidades y empresas públicas estatales o municipales;



00000105

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- k. Las garantías de ingresos o tráficos que ofrezca el Estado a favor del participante privado, con la Institución Contratante del Estado, así como las demás garantías que explícitamente se establezcan en dichas bases de licitación.
- l. El proyecto del contrato;
- m. Lugar, dirección, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación, recepción y apertura de plicas;
- n. Plazo que tendrá la Comisión de Evaluación para adjudicar la licitación;

Artículo 46. Invitación a Ofertar. Aprobados las bases de licitación, la Agencia emitirá la respectiva invitación pública internacional a efecto de recibir ofertas por parte de los interesados, dicha invitación deberá indicar la modalidad y lugar de entrega de las bases de licitación, la oficina y dirección, así como el día y hora fijados para la presentación y recepción de ofertas.

La invitación a ofertar será publicada de la siguiente manera:

- a) Dos veces dentro del plazo de treinta días en el Diario Oficial y en otros dos de amplia circulación nacional.
- b) Dos veces en una publicación internacional especializada en compras de gobierno dentro del plazo de treinta días.
- c) En la página web de la Agencia y en GUATECOMPRAS el mismo día de aprobación de las bases de licitación.

Artículo 47. Publicación y Entrega de Bases de Licitación y del Proyecto del Contrato. Las bases de licitación y el proyecto del contrato, se publicarán en el sitio de Internet de la Agencia y en GUATECOMPRAS, para que sean de conocimiento y acceso público el mismo día de su aprobación y se entregarán en idéntico formato a quien las solicite, según la información proporcionada en la invitación a ofertar. El acceso al contenido de los documentos será gratuito.

Para la fecha de recepción de ofertas, deberá mediar un plazo de por lo menos sesenta días calendario, contados a partir de la fecha de la última publicación.

Artículo 48. Propuesta Técnica y Oferta Económica. Los ofertantes deberán presentar dos plicas separadas, una que debe contener la propuesta técnica de conformidad con los requerimientos establecidos en las bases de licitación y la otra que deberá contener una oferta económica.



00000106

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 49. Presentación de Ofertas. Las ofertas y demás documentos que requieran las bases de licitación deberán entregarse directamente a la Agencia en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases de licitación.

Artículo 50. Comisión de Evaluación. Las ofertas técnicas y económicas serán evaluadas por una Comisión de Evaluación que estará integrada por dos representantes de la Agencia, un representante del Ministerio de Finanzas Públicas, un representante de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y un representante de la Institución contratante del Estado. Los integrantes de esta Comisión podrán estar contratados bajo cualquier renglón presupuestario y en todo caso deberán contar con experiencia profesional de por lo menos cuatro años y responderán administrativa, civil y penalmente de sus actos en ejercicio de esa participación dentro de la Comisión, a menos que hayan dejado constancia razonada en acta de su voto disidente.

La Comisión de Evaluación será la encargada de calificar y pronunciarse sobre la suficiencia de los documentos exigidos en las bases de licitación.

La Comisión de Evaluación adoptará sus decisiones por mayoría simple de sus miembros, quienes no podrán abstenerse de votar, dejando constancia en acta de su decisión.

Artículo 51. Impedimentos para ser miembros de la Comisión de Evaluación. No podrán ser miembros de la Comisión de Evaluación, quienes:

- a) Tengan antecedentes penales o hayan sido condenados en juicio de cuentas;
- b) Tengan conflicto de intereses con ofertantes o participantes privados;
- c) Sean parte o tengan interés en algún litigio, acto, contrato o garantías vinculados con la suscripción o ejecución de contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o estén relacionados con sociedades que se encuentren en la situación descrita;
- d) Tengan parientes dentro de los grados de ley, con interés directo o indirecto en proyectos y contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica;
- e) Tengan parentesco dentro de los grados de ley con algún participante privado;
- f) Sean parientes dentro de los grados de ley, de la autoridad superior de la Institución contratante del Estado y de la Agencia;



00000107

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- g) Hayan aceptado herencia, legado o donación de alguno de los participantes privados en procesos de licitación;
- h) Sean socios o partícipes de algún participante privado;

Artículo 52. Recepción Única de las Ofertas. Las ofertas serán recibidas en un acto público por la Comisión de Evaluación.

Se abrirán las propuestas técnicas de todos los ofertantes, dejando cerradas las ofertas económicas, las que deberán estar bajo la custodia de la Comisión de Evaluación.

La Agencia deberá invitar a personas individuales o jurídicas y a los medios de comunicación social nacionales y extranjeros, a presenciar el acto de apertura de ofertas, a efecto de promover la transparencia y la auditoría social del régimen de licitación y asimismo publicará las actas, y la grabación de audio y video íntegras del acto, en el sitio de Internet de la Agencia y de GUATECOMPRAS de manera inmediata.

Artículo 53. Calificación de la Oferta Técnica y Económica. La Comisión de Evaluación procederá a abrir y calificar las propuestas técnicas para determinar cuáles cumplen con los requerimientos y especificaciones establecidas en las bases de licitación.

La Agencia deberá invitar a personas individuales o jurídicas y a los medios de comunicación social nacionales y extranjeros, a presenciar el acto de apertura de ofertas, a efecto de promover la transparencia y la auditoría social del régimen de licitación y asimismo publicará las actas, y la grabación de audio y video íntegras del acto, en el sitio de Internet de la Agencia y de GUATECOMPRAS de manera inmediata.

Las propuestas técnicas que incumplan lo requerido serán rechazadas, debiéndose entregar en el mismo acto junto con la oferta económica al ofertante, dejando constancia en el acta esas circunstancias.

Una vez seleccionadas las propuestas técnicas aceptables que cumplen con los requisitos establecidos en las bases de licitación, se procederá a la apertura de las ofertas económicas que acompañaron los ofertantes junto a aquellas.

Artículo 54. Criterios de Adjudicación. La adjudicación de la licitación se decidirá según el sistema de evaluación que la Agencia establezca y haya aprobado en las bases de licitación.

Artículo 55. Adjudicación de la Comisión de Evaluación. La Comisión de Evaluación adjudicará el proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, luego de la calificación realizada a



00000108

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

las ofertas presentadas, identificando la oferta que responda de mejor manera a los requisitos y condiciones establecidas en las bases de licitación. La evaluación y adjudicación deberán realizarse en los plazos que establezcan para cada caso las bases de licitación.

La recepción y calificación de las ofertas, así como la adjudicación del proyecto, se realizará en un solo acto, del que se dejará registro en acta y en grabación de audio y vídeo.

La resolución de adjudicación del proyecto, deberá ser emitida de manera fundada, dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes. El acta de la diligencia será parte de la resolución. La Comisión de Evaluación elevará las actuaciones al Consejo para su aprobación.

En el Reglamento se establecerá la forma en que se integrará el expediente completo para ser remitido al Consejo.

La Comisión deberá publicar su resolución en la página de internet de la Agencia y en GUATECOMPRAS, junto al expediente completo.

Artículo 56. Procedimiento para la Aprobación de la Adjudicación de la Comisión de Evaluación. El Consejo aprobará o improbará lo actuado por la Comisión de Evaluación, dentro del plazo de treinta días a partir de la recepción del expediente, por mayoría absoluta. La resolución del Consejo será publicada por el Consejo, dentro de un plazo de diez días, en el Diario Oficial, en la página web de la Agencia y en GUATECOMPRAS.

En caso que se impruebe la adjudicación, el Consejo con exposición razonada, remitirá el expediente dentro de los quince días siguientes a la Comisión de Evaluación, para su revisión con base a las observaciones y el plazo que el Consejo haya determinado para el efecto.

La Comisión de Evaluación revisará lo actuado, debiendo decidir en forma razonada, en un plazo de quince días contados a partir de la recepción del expediente. Esta trasladará todas las actuaciones, para su aprobación o improbación definitiva, dentro de un plazo de quince días.

Si el Consejo imprueba la adjudicación después de haber sido revisada por la Comisión de Evaluación, podrá ordenar el archivo de ese procedimiento y convocar a una nueva licitación conforme lo establecido en la presente ley y su Reglamento.

Artículo 57. Notificación. La resolución que dicte el Consejo aprobando o improbando la adjudicación deberá ser notificada a todos los ofertantes dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de su emisión.



00000103

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 58. Recurso de Reconsideración. El agraviado de la resolución de adjudicación podrá interponer recurso de reconsideración en contra del Consejo, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha de la notificación respectiva.

Una vez recibido el recurso de reconsideración, se emitirá una providencia de trámite teniéndolo por recibido, se convocará al interponente para que dentro de los cinco días siguientes comparezca a una audiencia oral, pública, contradictoria, continua y revestida de inmediación, para que presente de viva voz sus argumentos y reproduzca la prueba que apoye su inconformidad.

El Consejo deliberará y resolverá por mayoría, inmediatamente después que el interponente del recurso emita argumentos finales.

La resolución será fundada y deberá emitirse la parte resolutive en esa oportunidad, convocando al interponente para que se presente veinticuatro horas después para entregarle copia escrita de la misma.

Artículo 59. Sociedad de Giro Exclusivo o de Propósito Específico. El ofertante a quien se le haya adjudicado la licitación, quedará obligado a constituir dentro del plazo de treinta días a partir de la notificación, una sociedad mercantil de nacionalidad guatemalteca de giro exclusivo y con acciones nominativas, con quien se celebrará el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Esta sociedad mercantil deberá incluir obligatoriamente en su denominación las palabras "sociedad de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica de Infraestructura Económica". Su objeto será determinado en las bases de licitación de conformidad con las características propias de las obras o servicios adjudicados. Su duración será, como mínimo, el plazo que dure el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica más dos años y el tiempo que deba durar el plazo de garantía de las obras y servicios realizados.

La Sociedad de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, estará sujeta a las normas que regulan a las sociedades mercantiles en general, de acuerdo a lo preceptuado en el Código de Comercio, así como a esta ley, sin perjuicio de lo contemplado en las bases de licitación, esta ley y su Reglamento.

Artículo 60. Derecho de Prescindir. El Consejo podrá prescindir y desistir del proyecto en cualquier momento por caso fortuito y fuerza mayor que se estipulen en las bases de licitación, debidamente comprobados, debiendo para tal efecto indemnizar con responsabilidad del Estado al participante privado, de la siguiente manera:

- a. Entre la adjudicación y la suscripción del contrato, el diez por ciento (10%) del monto de inversión comprometida.



00000119

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- b. Treinta (30) días después de la suscripción del contrato, con el quince por ciento (15%) del monto de la inversión comprometida en el contrato.
- c. Si el Congreso de la República improbara el contrato con el quince del monto (15%) de la inversión comprometida.

Para pagar la indemnización establecida en este artículo, el Ministerio de Finanzas Públicas asignará recursos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.

Artículo 61. Precalificación de Licitantes. El Consejo podrá efectuar un llamado a precalificación internacional de licitantes destinados a seleccionar a los potenciales ofertantes, en el caso de proyectos complejos en que se necesite asegurar la participación de empresas idóneas y de reconocida experiencia en los proyectos de que se trate. Las bases de precalificación definirán los objetivos y requisitos que sean necesarios para participar en este tipo de eventos, en tanto no constituyan elementos arbitrarios y resguarden la igualdad de trato entre los participantes de este proceso.

No podrán ser precalificadas las personas que hayan abandonado contratos con el Estado o sufrido sanciones por infracciones graves. Tampoco podrán serlo los participantes privados que, en el pasado, en materia de controversias, hayan actuado en forma oportunista eludiendo, sin mediar justificación objetiva, los mecanismos de solución de controversia establecidos en esta ley. Los procesos de precalificación se realizarán utilizando el mismo procedimiento de evaluación para una licitación, en lo que fuere aplicable. Los resultados deberán ser aprobados por el Consejo mediante resolución fundada y en contra de ésta podrá interponerse recurso de reconsideración en los términos que establece esta ley.

El listado de precalificados deberá ser publicado en la página web de la Agencia, así como en GUATECOMPRAS.

Artículo 62. Consultas y Aclaraciones. Los interesados en una licitación de contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, podrán realizar consultas y aclaraciones por escrito y por cualquier medio electrónico sobre las bases de licitación y el proyecto del contrato, las cuales deberán dar origen a una respuesta pública dentro de los tres días siguientes a su recepción. Tanto el requerimiento como la respuesta, deberá estar disponibles a favor de todos los interesados en el sitio de Internet de la Agencia, GUATECOMPRAS y por medios electrónicos.

La Agencia, con aprobación del Consejo, podrá realizar aclaraciones sobre las bases de la licitación y el proyecto del contrato, sin desnaturalizar su sentido original. Este proceso de consultas y aclaraciones deberá concluirse quince días antes del plazo de la presentación de ofertas.



00000111

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

TÍTULO IV

**DE LOS CONTRATOS DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA**

CAPÍTULO I

**SUSCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LOS CONTRATOS DE
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA**

Artículo 63. De la Forma del Contrato. Los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, tienen carácter solemne y serán celebrados entre la Institución contratante del Estado y el participante privado. También deberán ser suscritos por el Director Ejecutivo de la Agencia, previa resolución del Consejo.

Una vez aprobado en el Congreso de la República, el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, deberá ser remitido al Escribano de Cámara y Gobierno para que éste faccione en escritura pública el mismo, dentro del plazo de diez días contados a partir de su recepción.

En caso que se impruebe el contrato, el Congreso de la República deberá trasladar el mismo al Consejo para que se proceda de conformidad con esta ley.

Los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que se celebren de conformidad con esta ley, deberán contemplar la obligación de cumplir, durante la vigencia del contrato, con los niveles de servicio, estándares y especificaciones técnicas que correspondan de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación.

Artículo 64. Suscripción del Contrato. Los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, deberán ser suscritos dentro del plazo que establece esta ley.

Si transcurriere el plazo y el contrato no fuere suscrito por responsabilidad del adjudicatario, la Agencia deberá dejar sin efecto la adjudicación realizada, haciendo efectiva la garantía de sostenimiento de la oferta y podrá adjudicar al segundo mejor ofertante calificado en su orden, siempre y cuando haya obtenido un porcentaje mayor o igual al mínimo establecido para evaluar las ofertas de conformidad con las bases de licitación.

De no cumplirse ninguno de los presupuestos anteriores, la Agencia deberá archivar el proceso y convocar a una nueva licitación pública en los términos regulados en esta ley.



00000112

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 65. Del Contenido del Contrato. Los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, deberán reflejar el contenido de las bases de licitación, incorporar los datos específicos del ofertante ganador y respetar la legislación vigente.

Artículo 66. Otras Disposiciones Contractuales. Adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 65 anterior, se aplicarán las siguientes reglas a los contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica:

- a. Los contratos deberán contener los requisitos y condiciones bajo los cuales se pueda autorizar por parte de la Agencia, la transferencia del control de la sociedad mercantil de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica hacia sus financistas, siempre y cuando la finalidad principal de dicha transferencia sea la reestructuración financiera de la sociedad y la ejecución continua del proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
- b. Los contratos deberán contener la posibilidad de constitución de garantías por parte del participante privado, a favor de las entidades financieras del proyecto, respecto de los derechos provenientes del contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, debiendo establecerse la obligación de registrar dichas garantías en el Registro de la Agencia.
- c. Para garantizar los contratos celebrados, las partes podrán pactar su sujeción a la normativa de seguros de Organismos Multilaterales e Instituciones que ofrecen Garantías de Inversiones reconocidas. En tal caso, los conflictos que se deriven de esos seguros se deberán necesariamente resolver por los sistemas de resolución de controversias establecidos por dichos Organismos Multilaterales e Instituciones que ofrecen Garantías de Inversiones, sin perjuicio de que las controversias que se susciten entre el Estado y el participante privado, se resolverán por el sistema de resolución de controversias establecido en el Título VI de esta ley.
- d. Los bienes y derechos que adquiriera el participante privado a cualquier título y que queden afectos al contrato, no podrán ser enajenados separadamente, ni hipotecados o sometidos a gravámenes de ninguna especie, sin consentimiento de la Institución Contratante del Estado y del Consejo y pasarán a dominio del Estado al extinguirse el contrato.
- e. Cuando para la ejecución de las obras sea necesaria la modificación de servidumbres constituidas a favor de terceros ya existentes, el participante privado será responsable de la restitución del servicio amparado por la servidumbre de que se trate a su estado inicial, restitución que deberá ser financiada por el participante privado en la forma que establezcan las bases de licitación.



00000113

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

El participante privado costeará sólo la restitución del servicio a las condiciones que éste tenía previo a la modificación de la servidumbre. La restitución del servicio deberá ser aprobado por la Agencia antes de la entrega al titular de la servidumbre. Debe indicarse en el contrato que cualquier disputa con el titular de la servidumbre, deberá ser resuelta a través de conciliación o arbitraje.

Artículo 67. De la Expropiación. Se declaran de utilidad colectiva, beneficio social e interés público las expropiaciones necesarias para realizar proyectos de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica. El Consejo de la Agencia, será el encargado de aprobar de manera razonada esa justificación. En caso de requerirse expropiaciones y el establecimiento de derechos de vía, la Dirección Ejecutiva tendrá facultades para gestionar por sí misma o a través de la Institución Contratante del Estado, la expropiación de las propiedades necesarias para esos efectos, para lo cual se le aplicarán las siguientes reglas especiales.

La Dirección Ejecutiva iniciará el expediente y lo elevará al Consejo con el objeto de que éste, mediante Acuerdo fundado adoptado por mayoría de sus integrantes, declare la utilidad colectiva, el beneficio social o el interés público sobre el bien o bienes objeto de la expropiación en materia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial dentro de los ocho días siguientes a su emisión y notificarse al propietario del bien o bienes afectados, a fin de que éstos realicen sus propuestas y designen, dentro del perentorio plazo de quince días, a un perito valuador autorizado por la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas y presente además cualquier otro medio de prueba para fundamentar su postura en cuanto a la indemnización que pretenda de conformidad a valores de mercado.

El Director Ejecutivo, por su parte, designará a un perito valuador autorizado por la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas a efecto de que realice, en representación de la Agencia, la justipreciación del bien o bienes que se necesiten expropiar en proyectos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, a valores de mercado.

El Consejo deberá autorizar el nombramiento de ambos peritos, dentro del plazo de los quince días siguientes a su proposición. El Consejo sólo podrá rechazar dicho nombramiento, si el perito designado incurra en algunos de los impedimentos siguientes:

- a) Tengan antecedentes penales o hayan sido condenados en juicio de cuentas;
- b) Tengan conflicto de intereses con ofertantes o participantes privados;
- c) Sean parte o tengan interés en algún litigio, acto, contrato o garantías vinculados con la suscripción o ejecución de contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o estén relacionados con sociedades que se encuentren en la situación descrita;



00000114

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- d) Tengan parientes dentro de los grados de ley, con interés directo o indirecto en proyectos y contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica;
- e) Tengan parentesco dentro de los grados de ley con algún participante privado;
- f) Sean parientes dentro de los grados de ley, de la autoridad superior de la Institución contratante del Estado y de la Agencia;
- g) hayan aceptado herencia, legado o donación de alguno de los participantes privados en procesos de licitación;
- h) sean socios o partícipes de algún participante privado;

Los peritos deberán enviar al Consejo sus dictámenes razonados dentro de un plazo que no podrá exceder de 30 días a partir de su nombramiento.

Si el dictamen del perito de la parte afectada y el de la Dirección Ejecutiva fueran concordantes, se procederá por parte del Consejo a autorizar la escritura de traspaso de dominio del bien, ante el Escribano de Cámara y Gobierno y formalizar el pago. Los desembolsos necesarios podrán ser a cargo del participante privado o de la Agencia, según se establezca en las bases de licitación.

Si el propietario afectado no presentara su propuesta, no nombrara perito o no presentara el dictamen pericial dentro de los plazos señalados anteriormente, el Consejo autorizará al Director Ejecutivo para que proceda a consignar en una cuenta corriente bancaria creada a nombre del propietario afectado, la cantidad dineraria que el perito de la Dirección Ejecutiva haya determinado en base al avalúo realizado. Efectuado el pago mencionado, la Dirección Ejecutiva podrá tomar posesión del bien para continuar con la ejecución del proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, caducando entonces la facultad del propietario afectado de solicitar modificaciones al monto de la indemnización consignada. Sin perjuicio de ello, el propietario afectado podrá solicitar reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo, el que deberá trasladar la decisión a la aprobación del Consejo. De aprobarse esa reconsideración por la mayoría de los miembros del Consejo, el monto que se entregue al propietario afectado no podrá superar el diez por ciento (10%) de la cantidad dineraria que el perito de la Dirección Ejecutiva haya determinado con base al avalúo realizado.

Si los dictámenes de ambos peritos difieren en cuanto a los montos de la indemnización, se procederá a realizar una etapa de negociación entre el propietario afectado y la Dirección Ejecutiva dentro de los quince días siguientes a la recepción de los dictámenes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el referido monto. De no presentarse el propietario afectado a este proceso de negociación luego de tres citaciones y sin causa debidamente justificada, el Director Ejecutivo procederá de conformidad a lo



00000115

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

establecido en el párrafo anterior y caducará entonces la facultad del propietario afectado de solicitar ajustes al monto de la indemnización consignada. En tal caso nacerá para el propietario el derecho de interponer recurso de reconsideración en los términos antes descritos.

Si en el marco de la negociación se llegara a acuerdo, se procederá de conformidad con el faccionamiento de la escritura pública ante el Escribano de Cámara y Gobierno y el pago respectivo establecido en este artículo. Si el acuerdo no se produce, el Director Ejecutivo consignará en una cuenta corriente bancaria creada a nombre del propietario afectado la cantidad dineraria que el perito de la Dirección Ejecutiva haya determinado con base al avalúo realizado. Efectuado el pago mencionado la Dirección Ejecutiva podrá tomar posesión del bien para continuar la ejecución del proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, sin perjuicio que el propietario afectado pueda solicitar, únicamente mediante un procedimiento de conciliación o arbitraje, el que no podrá durar más de seis meses, el reajuste de la indemnización con base al avalúo realizado por su perito o en base a otros medios de prueba que lo justifiquen. Si a consecuencia de este procedimiento se resolviera un ajuste, deberá pagarse el mismo dentro del plazo de 30 días siguientes a la resolución que lo disponga y sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. En el mismo acto del pago, deberá suscribirse la escritura pública ante el Escribano de Cámara y de Gobierno, dentro de los plazos establecidos en este artículo.

En caso de que el propietario afectado no se presente a recoger los pagos a él depositados señalados dentro del plazo de dos años desde que se efectuó la consignación bancaria, el monto se consignará judicialmente.

La indemnización deberá fijarse conforme al procedimiento establecido previamente y en moneda efectiva de curso legal, a menos que, con el interesado se convenga en acuerdo escrito otra forma de compensación.

Artículo 68. De las Garantías y Seguros. Las garantías, seguros o fianzas que deba constituir el participante privado con motivo de la ejecución del contrato, se regirán por lo establecido en esta ley, su Reglamento, las bases de licitación y el contrato.

Artículo 69. Garantía Prendaria. Se establece una prenda especial de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, la cual será sin desplazamiento de los derechos y bienes prendados. Esta será pactada entre el participante privado y los financistas del proyecto o de su operación, o en la emisión de títulos de deuda de la sociedad mercantil. La garantía prendaria podrá recaer sobre:

- a. Los derechos que para el participante privado emanen del contrato;
- b. Todo pago comprometido por el Estado a la sociedad mercantil de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica a cualquier título, en virtud del contrato suscrito; y,



00000116

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- c. Sobre los ingresos o bienes de la sociedad mercantil de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica.

Esta prenda deberá constituirse por escritura pública e inscribirse en el libro especial de prendas de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica del Registro Público de la Agencia, creado en esta ley. Además, deberá anotarse al margen de la inscripción de la sociedad mercantil de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica en el Registro Mercantil de Guatemala.

Cuando esta prenda recaiga sobre acciones de la sociedad mercantil, se anotará además, en los registros correspondientes que la legislación vigente ordene.

CAPÍTULO II

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

Artículo 70. Entrega de Bienes. En el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica se deberá especificar, los bienes que serán de propiedad pública y los que serán de propiedad del participante privado. En particular, en el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica se especificarán los bienes que pertenezcan a las categorías siguientes:

- a. Los bienes que el participante privado esté obligado a devolver o transferir al Estado, de conformidad con lo dispuesto en el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- b. Los bienes que, el Estado pueda optar por comprar al participante privado; y,
- c. Los bienes que, el participante privado pueda retener o de los que pueda disponer al terminar el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Artículo 71. Compensación por Actos Sobrevinientes. El participante privado podrá solicitar compensación en caso de acto sobreviniente de autoridad pública, que modifique los términos y condiciones cuando:

- a) el acto se produzca con posterioridad a la presentación de la oferta del ofertante y no haya sido previsto en las bases de licitación;



00000117

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- b) constituya un cambio legislativo o reglamentario, dictado con efectos específicos para el ámbito de la industria de las Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, después de la adjudicación del proyecto o de haberse suscrito el contrato.

Artículo 72. Garantías en el Desarrollo del Contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. El contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica deberá determinar, las obligaciones del participante privado a fin de garantizar:

- a. La adaptación del servicio para que responda a la demanda real, de acuerdo a las bases de licitación;
- b. La continuidad y regularidad del servicio; y,
- c. La disponibilidad del servicio para los usuarios en condiciones que impidan la discriminación arbitraria del mismo, salvo los casos en que las bases de licitación lo autoricen por razones de bienestar social.

CAPÍTULO III

**TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS AL ESTADO**

Artículo 73. Terminación del Contrato. El contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica terminará por:

- a. Vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición;
- b. Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, definidas en las bases de licitación;
- c. Las causas que se estipulen en las bases de licitación y en el contrato; y,
- d. Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados en la etapa de construcción.

Artículo 74. Incumplimiento o abandono del proyecto por el participante privado. En caso de incumplimiento o abandono del proyecto, la Agencia deberá designar un administrador, que sólo tendrá las facultades para velar por el cumplimiento del contrato de Alianzas para el Desarrollo de



00000118

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Infraestructura Económica. Este administrador responderá civil, penal y administrativamente por las acciones u omisiones dolosas o culposas en que incurriere en el ejercicio de su cargo.

Dentro del plazo de ciento veinte días contado a partir de la declaración del incumplimiento o del abandono, la Agencia previa aprobación del Consejo, deberá licitar el contrato por el plazo que le reste.

La declaración de incumplimiento hará exigibles las garantías que se encuentren establecidas en esta ley, su Reglamento, las bases de licitación y el contrato.

Artículo 75. Recepción. Cuando se finalice el contrato, de conformidad a esta ley, la Agencia y la Institución contratante del Estado, nombrará a una Comisión Receptora integrada por tres personas, la que en el plazo de noventa días, contado a partir de la fecha en que sean notificadas, se encargará de recibir la obra, bien o servicio, haciendo constar en actas las circunstancias en que éstos sean recibidos.

El participante privado, tendrá el plazo de 30 días para transferir a la institución contratante del Estado, lo siguiente:

- a. La transferencia de la tecnología utilizada e innovación introducida para la obra o servicio;
- b. La oportuna capacitación de los servidores públicos del Estado como sucesores en las actividades de explotación y mantenimiento del servicio y de la infraestructura; y,
- c. La prestación continua, por el participante privado, de servicios de apoyo, asesorías y recursos, incluido el suministro de repuestos, cuando sea necesario, durante un período de tiempo razonable, que se determinará en las bases de licitación.

Artículo 76. Liquidación. Inmediatamente después que las obras, bienes o servicios hayan sido recibidos por la Comisión Receptora, la Agencia y la Institución contratante del Estado nombrará dentro del plazo de diez días, contados a partir de la recepción, a una Comisión Liquidadora integrada por tres personas, la que en el plazo de noventa días, practicará la liquidación del contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y establecerá el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al participante privado.

La Comisión Liquidadora deberá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de licitación referidas en la entrega de las obras bienes y servicios. Asimismo, cumplirá con las demás obligaciones establecidas en el contrato y en el Reglamento de esta ley.

Dentro de los diez días siguientes de haber concluido la liquidación, la Comisión Liquidadora, elevará el expediente correspondiente al Consejo de la Agencia para su aprobación.



00000119

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 77. Aprobación de la Liquidación. El Consejo deberá aprobar o improbar la liquidación dentro de los sesenta días siguientes de recibido el expediente. En caso de improbación devolverá el expediente con exposición razonada a la Comisión Liquidadora para su revisión, dentro del plazo de diez días.

La Comisión Liquidadora tendrá un plazo de treinta días para concluir la revisión y remitirá dentro del plazo de tres días el expediente al Consejo para su consideración.

En caso que el Consejo impruebe la liquidación procederá al reclamo correspondiente, utilizando para el efecto los procedimientos de conciliación y arbitraje que reconoce esta ley.

TÍTULO V

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

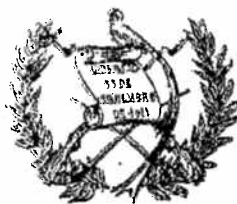
Artículo 78. Función del Inspector de Proyecto en el Período de Construcción. Durante la etapa de construcción del proyecto, existirá un Inspector de Proyecto, que dependerá de la Dirección Ejecutiva y tendrá la función de velar por la adecuada gestión del mismo, tendrá fe pública, y podrá imponer las multas y demás sanciones que señale el Reglamento, las que siempre deberán respetar los principios de proporcionalidad.

El Inspector de Proyecto deberá dar cuenta de su gestión a un Directorio *ad-hoc* constituido para cada proyecto, que formará parte de la Dirección Ejecutiva, estará conformado por dos representantes de la Agencia y dos representantes de la Institución Contratante del Estado y estará presidido por uno de los representantes de la Agencia, el que tendrá voto dirimente. Las instrucciones que el Inspector del Proyecto entregue al participante privado y las multas o demás sanciones que le imponga, deberán contar con la aprobación del Directorio respectivo. El Reglamento regulará el procedimiento de inspección y previo a imponer sanciones y para emitir instrucciones en el período de construcción.

El libro de obras del proyecto, deberá estar disponible en la página de Internet de la Agencia de manera actualizada. El Reglamento regulará los demás aspectos referidos al libro de obras.

Cada Directorio Adhoc designará al Inspector de Proyecto para el contrato, el que deberá tener el título de ingeniero con especialización en las áreas del proyecto de que se trate y reconocida experiencia en la materia.

El Directorio Adhoc y el Inspector de Proyecto tendrán las demás funciones que defina el Reglamento.



00000120

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 79. Supervisor de Proyecto en el Período de Construcción. Durante la etapa de construcción del proyecto, existirá un Supervisor por cada proyecto, que dependerá del Director de Fiscalización y tendrá la función de velar por la adecuada gestión del mismo, tendrá fé pública y podrá gestionar las multas y demás sanciones que señale el Reglamento, las que deberán respetar los principios de gradualidad y proporcionalidad.

Las multas o sanciones deberán ser aprobadas por el Director de Fiscalización, de conformidad al procedimiento que establece el Reglamento de esta ley.

El Supervisor de Proyecto será el responsable del libro de obras del proyecto, el que deberá estar disponible en la página de Internet de la Agencia, de manera actualizada.

Artículo 80. Ejercicio de la Función de Fiscalización de los Niveles de Servicio. Para efectos de la fiscalización de las especificaciones técnicas y de los niveles de servicio, la Dirección de Fiscalización deberá verificar el cumplimiento de los mismos.

En caso de incumplimiento, la Dirección de Fiscalización aplicará al participante privado las sanciones que correspondan de conformidad con esta ley, su Reglamento, las bases de licitación y el contrato, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Institución contratante del Estado contratante para imponer sanciones en el ámbito de su competencia. El Reglamento definirá los ámbitos de acción de la Dirección de Fiscalización, en relación con aquellos de la Institución contratante del Estado, para cada sector específico.

Artículo 81. Fiscalización de los Derechos del Usuario. Para resguardar los derechos de los usuarios de la obra o servicio, le corresponderá a la Dirección de Fiscalización verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas al respecto en la ley, el Reglamento y el contrato respectivo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Dirección de Fiscalización velará por el cumplimiento de:

- Las estructuras y niveles tarifarios previstos en los contratos y lo establecido en materia de cobro de tarifas o peajes;
- El manual de servicios de la obra y servicios, así como su adecuada publicidad y difusión;
- Las normas sobre información y difusión contenidas en la presente ley y su Reglamento; y,
- Las demás obligaciones y normas cuya fiscalización sea de su competencia, por la naturaleza de la misma.



00000121

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 82. Facultad de Requerir Información de Personas Fiscalizadas. En el ejercicio de sus facultades, la Dirección de Fiscalización podrá requerir a los participantes privados y demás entidades sujetas a su fiscalización, todo tipo de información, sea que ésta conste en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, electrónico o en cualquier otro formato y que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, los participantes privados y demás entidades sujetas a su fiscalización, deberán informar a la Dirección de Fiscalización de cualquier hecho esencial relativo a la actividad fiscalizadora, inmediatamente después de ocurrido éste o desde que se haya tomado conocimiento del mismo, y a más tardar dentro de los tres días siguientes. En caso que el tercer día corresponda a un día inhábil, la información deberá ser proporcionada a más tardar el día inmediato anterior a éste.

Se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente los niveles del servicio. La Dirección de Fiscalización, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá fijar normas de carácter general sobre la forma y modo de presentación de la información que las entidades sujetas a su fiscalización deban proporcionarle de conformidad a la legislación vigente.

Las disposiciones del participante privado que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no impedirán a que se proporcione a la Dirección de Fiscalización la información o antecedentes que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto. La violación de la obligación de reserva o secreto cometida por el personal de la Dirección de Fiscalización, será sancionada conforme a la legislación vigente.

Los documentos u otros mecanismos de información, exhibidos o presentados a la Dirección de Fiscalización por los participantes privados, deberán presentarse con el carácter de declaración jurada. Su falta de veracidad será sancionada de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 83. Facultad de Acceso. Los funcionarios de la Dirección de Fiscalización tendrán libre acceso a las obras y servicios, a las dependencias del participante privado y en general a todo inmueble o instalación de éstos, destinadas a la explotación de la obra que fiscalicen, procurando no interferir el normal desenvolvimiento de la actividad correspondiente.

Artículo 84. Facultad para Citar a Declarar. La Dirección de Fiscalización podrá citar a declarar a los representantes, directores, administradores, asesores, dependientes y empleados de los participantes privados, asimismo a testigos, respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario determinar para el cumplimiento de sus funciones. De cualquier reunión de esta clase se deberá dejar constancia en actas.



00000122

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 84. Reclamo de los Usuarios. Toda solicitud presentada por un usuario, en relación con la prestación de los servicios de conformidad con un contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, deberá ser atendida por el participante privado, resolviéndola de manera razonada dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir de su presentación. La Dirección de Fiscalización deberá instruir a los participantes privados acerca de los procedimientos y plazos para la atención, registro y respuesta de los diferentes reclamos, solicitudes y consultas que presenten los usuarios, de acuerdo a las normas que contemple el Reglamento.

En caso de falta de resolución oportuna o satisfactoria por parte del participante privado, la Dirección de Fiscalización conocerá de los reclamos que los usuarios presenten en contra de éste, debiendo pronunciarse sobre aquellos, sin perjuicio del derecho del usuario a ejercer las acciones judiciales que correspondan.

Artículo 85. Función de Informar. La Dirección de Fiscalización informará al Consejo y al Director Ejecutivo, sobre sus actuaciones para materializar una debida y responsable fiscalización, cuya periodicidad estará determinada en las bases de licitación y contrato, dependiendo de la naturaleza de la obra y del servicio.

El Consejo deberá solicitar a la Dirección de Fiscalización, previo a la aprobación de las bases de licitación y en los casos en que se determine en el Reglamento, que informe sobre la existencia de indicadores de niveles de servicio que permitan su fiscalización en la fase de explotación de la obra.

Previo a la aprobación del manual de servicio de la obra que proponga el participante privado para la puesta en servicio del proyecto, la Dirección de Fiscalización deberá informar a la Agencia y al Consejo, al menos, sobre las siguientes materias:

- a. La descripción de los derechos y obligaciones de los usuarios;
- b. Los niveles de servicio del proyecto; y,
- c. Las normas sobre reclamos de los usuarios.

Asimismo, la Dirección de Fiscalización deberá informar a la Institución contratante del Estado sobre los ajustes tarifarios o de cualquier naturaleza que corresponda efectuar de conformidad con las condiciones establecidas en los contratos.

Los informes elaborados por la Dirección de Fiscalización en cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo, deberán ser publicados en la página de Internet de la Agencia.



00000123

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 86. Verificación de Estándares Técnicos. La Dirección de Fiscalización deberá verificar el nivel de estándares técnicos de la obra y servicio y reportarlo dentro de la periodicidad establecida en el contrato respectivo.

Artículo 87. Elaboración de Análisis y Estudios. La Dirección de Fiscalización realizará anualmente los análisis y estudios sobre las materias de su competencia, los que deberán ser publicados en la página de internet de la Agencia y entre éstos deberá realizar análisis y estudios:

- a. Comparados sobre las diversas características y factores de la actividad de explotación de los servicios, especialmente en relación con la calidad y los costos.
- b. De percepción de los usuarios acerca de la calidad de los servicios prestados que estén en explotación.
- c. Reclamos interpuestos por los usuarios que sean acogidos favorablemente.

Artículo 88. Difusión de Derechos de los Usuarios. La Dirección de Fiscalización difundirá el régimen de derechos vigentes de los usuarios respecto a cada tipo de proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica que sea de su competencia.

Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, la Dirección de Fiscalización deberá publicar dicha información en su página de Internet, sin perjuicio de otros mecanismos de difusión que ésta establezca.

Artículo 89. Facultad para Aplicar Sanciones. La Dirección de Fiscalización podrá aplicar sanciones a las personas individuales o jurídicas sujetas a su fiscalización, por el incumplimiento o infracción de lo establecido en la presente ley, su Reglamento, las bases de licitación y el contrato respectivo, previo informe a la Institución contratante del contratante y sin perjuicio de las facultades que le corresponden a ésta, para imponer sanciones en el ámbito de su competencia.

Las multas que se establezcan en el contrato en relación con el incumplimiento de los niveles de servicio, deberán respetar el principio de proporcionalidad.

Las multas y sanciones se impondrán de acuerdo al procedimiento siguiente:

- a) La Dirección de Fiscalización notificará el objeto que genera el procedimiento sancionatorio, otorgándole al participante privado una audiencia oral dentro de los quince días siguientes para que ejerza sus defensas y presente las pruebas de descargo que considere oportunas;



00000124

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- b) La audiencia conferida será oral, pública, contradictoria, continua y revestida de inmediación, se respetará el principio de concentración y libertad probatoria. El participante privado deberá plantear argumentos iniciales, presentará las pruebas que considere oportunas y deberá emitir argumentos finales. Al finalizar la audiencia, la Dirección de fiscalización emitirá la resolución que en derecho corresponda, valorando la prueba de conformidad con la sana crítica racional.
- c) La resolución que concluye el procedimiento sancionatorio, sólo podrá ser impugnada a través del recurso de reconsideración.

Artículo 90. Instrucciones a los Participantes Privados. La Dirección de Fiscalización podrá instruir a los participantes privados para que éstos adopten las medidas necesarias para el mantenimiento y cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos, así como para asegurar el ejercicio de los derechos de los usuarios y en general, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Artículo 91. Convenios. La Dirección de Fiscalización podrá celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, tanto con el propósito de recabar información, potenciar la difusión de los derechos de los usuarios de obras y servicios, como de ampliar y facilitar las vías de denuncia de eventuales incumplimientos de las prestaciones o vulneraciones de los derechos de los usuarios.

Artículo 92. Fiscalizadores. Los funcionarios de la Agencia con calidad de inspectores o supervisores tendrán fe pública de los hechos que consignen en el cumplimiento de sus funciones, debiendo acreditar debidamente los mismos, para lo cual tendrán pleno acceso a los proyectos fiscalizados, sin otra limitación que el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes.

TÍTULO VI

DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 93. Conciliación y Arbitraje. Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución de cada contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica celebrado de conformidad con la presente ley, se resolverán de conformidad a las normas de conciliación y arbitraje que en ésta se determinan.

Artículo 94. Comisión Arbitral Adhoc y CIADI. Las controversias generadas bajo el contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, serán resueltas por la Comisión Arbitral adhoc, mediante conciliación o arbitraje, los que constituyen los únicos mecanismos de resolución de los conflictos, de naturaleza privada y especializada en Guatemala, reconocidos en esta ley, ajenos a la jurisdicción ordinaria. Esto deberá constar en los contratos suscritos, al adherirse las partes voluntariamente ex ante a dichos conflictos, a un contrato de adhesión que debe reflejar necesariamente



00000125

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

el contenido de las bases de licitación, denominado contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica. Las controversias que se susciten a consecuencia de los contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, deberán ser resueltas mediante alguno de los mecanismos siguientes:

- a) A través de conciliación y arbitraje local en Guatemala ante la Comisión Arbitral Adhoc que regula la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica;
- b) A través de conciliación y arbitraje internacional, en los casos que el participante privado prefiera resolver las controversias bajo esa jurisdicción, siempre que haya renunciado antes de la emisión de la resolución de conciliación o arbitraje local que establece esta ley.

Para el efecto, el participante privado podrá elegir la jurisdicción de conciliación y arbitraje internacional renunciando a la conciliación o arbitraje local, siempre que la renuncia se manifieste expresamente antes de la interposición de dichos mecanismos locales o previo a que dentro de éstos se emita la resolución de los mismos.

Si el participante privado cuenta con inversiones extranjeras y desea someter la resolución de la controversia en jurisdicción internacional, deberá acudir ante CIADI, en aplicación de la normativa que le es inherente, atendiendo las modificaciones al procedimiento que permite ese sistema y que se especifican en esta ley.

Tanto la resolución del arbitraje establecido en la literal a) como en la b) constituyen laudos arbitrales en derecho, los que se sujetarán a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 o Convención de Nueva York.

Los participantes privados podrán someter sus conflictos ante la Cámara Internacional de Comercio, la Corte Londinense de Arbitraje Internacional o la Asociación Americana de Arbitraje, dejando ésta posibilidad en el contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, estableciendo las normas pertinentes en cláusula arbitral con la posibilidad de utilizar la normativa vigente de UNCITRAL, con las mismas modificaciones que se establecen para la conciliación y arbitraje ante CIADI en esta ley.

Para el efecto, si alguna de las partes ha iniciado procedimiento conciliatorio o arbitral ante la Comisión Arbitral Adhoc en Guatemala, deberán renunciar expresamente a éstos previo a que se emita su resolución, lo que habilitará el uso de esos mecanismos de resolución de controversias en el ámbito internacional.



00000126

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Artículo 95. Interferencias a la naturaleza privada de la conciliación y arbitraje. En caso que alguna de las partes pretenda desnaturalizar el carácter eminentemente privado del sistema de resolución de controversias definido en esta ley a través de conciliaciones y arbitrajes locales e internacionales, acudiendo a la jurisdicción ordinaria dentro de Guatemala, la otra parte deberá interponer las excepciones, quejas y denuncias legales necesarias ante la institución, el juzgado o tribunal del sistema de justicia ordinaria que corresponda, con el objeto de impedir que el uso de esa jurisdicción ordinaria desvirtúe la naturaleza jurídica privada del sistema conciliatorio y arbitral reconocido en esta ley y acordada entre ambas partes en el contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica ex ante del conflicto o controversia.

El funcionario o juzgador del sistema de justicia ordinaria, que reciba solicitud de alguna intervención judicial en el sistema conciliatorio y/o arbitral, deberá declarar inmediatamente la no admisión de la petición, inhibiéndose de conocer el asunto en respeto a la naturaleza jurídica privada del sistema.

La Comisión Arbitral *ad hoc* creada en esta ley, no podrá suspender bajo ninguna razón, el conocimiento y el procedimiento del arbitraje de conformidad a sus propias reglas.

Artículo 96. Integración de la Comisión Arbitral Ad Hoc. La Comisión Arbitral Ad Hoc, estará integrada por tres profesionales universitarios, de los cuales dos serán abogados y uno de éstos la presidirá. Los integrantes serán nombrados de común acuerdo por las partes, en la forma contemplada por el Reglamento, a partir de dos listas; la primera integrada por seis abogados, tres de los cuales serán propuestos por el Consejo de la Agencia y tres por el participante privado; y la segunda lista integrada por cuatro profesionales universitarios de áreas ligadas a la economía o a la ingeniería, dos de los cuales serán propuestos por el Consejo de la Agencia y dos por el participante privado.

De igual manera se propondrá y elegirá a los miembros suplentes de la Comisión Arbitral Adhoc.

A falta de acuerdo para nombrar a los árbitros de común acuerdo, dentro de los tres días siguientes se realizará un sorteo entre los profesionales enlistados de conformidad con lo que establece este artículo, ante Notario Público, quien faccionará acta notarial de cuanto acontezca en la audiencia de nombramiento.

Los miembros de la Comisión Arbitral Adhoc que conozcan de una conciliación, no podrán participar en el conocimiento del arbitraje, en éste caso deberá integrarse con los suplentes para integrar el tribunal respectivo.

Artículo 97. Requisitos para integrar la Comisión Arbitral Adhoc. Podrán integrar la Comisión Arbitral Adhoc, quienes reúnan los siguientes requisitos:



00000127

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- a) Quienes acrediten por lo menos diez años de ejercicio profesional;
- b) Quienes hayan estado o estén relacionados con empresas que sean parte de algún contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica celebrado de conformidad a la presente ley, los doce meses previos a su designación. Las limitaciones descritas en este párrafo se mantendrán respecto de cada integrante hasta un año después de haber terminado su período.

Artículo 98. Constitución de la Comisión Arbitral Adhoc, plazo de nombramiento y remuneración por servicios. Dentro de los sesenta días siguientes a la celebración del contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, la Comisión Arbitral Adhoc deberá quedar constituida. Sus integrantes permanecerán en el cargo durante el plazo máximo de cinco años pudiendo ser reelectos.

Los Arbitros de la Comisión Arbitral Adhoc podrán ser reemplazados de común acuerdo, cuando ello sea necesario a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que hubieren transcurrido más de tres años desde la fecha de su nombramiento y no estuvieren conociendo de un reclamo o controversia.

Si existiera incapacidad o impedimento sobreviniente comprobado, aplicará el mismo procedimiento de designación establecido en la ley.

Los integrantes de la Comisión Arbitral Adhoc estarán en disponibilidad permanente para resolver las controversias de manera expedita a través de conciliación y arbitraje, serán remunerados por el participante privado y la Agencia por partes iguales, con base a los servicios que presten en ejercicio de sus funciones.

Artículo 99. Procedimiento para resolver controversias ante la Comisión Arbitral Ad Hoc. La Comisión Arbitral, en cuanto se designen sus integrantes y se constituya, deberá determinar dentro del plazo de treinta días siguientes a su toma de posesión con acuerdo de las partes, el modo en que se le formularán las solicitudes o reclamaciones y el mecanismo de notificación que ésta empleará para poner en conocimiento de las partes las peticiones o resoluciones.

La Comisión dictará dentro del mismo plazo las normas de procedimiento que estime pertinentes para resolver controversias, incluyendo entre éstas las que regulen la audiencia de las partes, garantizando los principios de bilateralidad, oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y continuidad, utilizando la libertad probatoria sin más limitación que la ilegalidad de las pruebas y valorando las pruebas de conformidad al sistema de la sana crítica racional.

Artículo 100. Conciliación ante la Comisión Arbitral Adhoc. Sometido un asunto a su conocimiento, la Comisión Arbitral Ad Hoc, buscará la conciliación entre las partes y les propondrá, oralmente o por escrito, bases de arreglo dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere solicitado su intervención. Si la conciliación no se produjere en ese término, cualquiera de las partes podrá, dentro de los cinco días hábiles siguientes, acudir ante la Comisión a plantear arbitraje.



00000128

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Si las partes dejaren transcurrir el plazo antes señalado, sin informar su pretensión de someter la controversia a arbitraje, quedará firme la resolución.

Ambas partes pueden renunciar a la opción de la conciliación, para el efecto deberán manifestarlo expresamente, para habilitar el procedimiento e interponer arbitraje.

Artículo 101. Arbitraje ante la Comisión Adhoc. Si las partes no llegaran a conciliar la controversia, someterán su conflicto mediante arbitraje a conocimiento de la Comisión Arbitral Ad hoc.

La Comisión Arbitral tendrá un plazo máximo de sesenta días hábiles, contados desde que se cite a las partes para dictar el laudo arbitral en derecho, el que será fundado.

El laudo arbitral será de eficaz y de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de su notificación. Contra el laudo arbitral no procederá recurso alguno.

Los gastos y honorarios deberán ser pagados por partes iguales.

Artículo 102. Resolución de Conflictos ante CIADI. El participante privado que pretenda someter una controversia ante la jurisdicción de conciliación y arbitraje internacional, podrá someter el mismo ante CIADI, de conformidad a los procedimientos de conciliación y arbitraje que ésta establece, con las modificaciones siguientes:

- a) La legislación a aplicar es la guatemalteca;
- b) El idioma oficial de los procedimientos es el español;
- c) El lugar de la conciliación y el arbitraje internacional se realizará en la ciudad de Guatemala, en Guatemala, Centro América;
- d) Los honorarios y gastos en que se incurra dentro de estos procedimientos serán pagados por la parte vencida, atendiendo los aranceles establecidos en CIADI;
- e) En todo lo aplicable, las Reglas o normas de CIADI, deberán ser ajustadas por las normas establecidas en este Título, debiéndose entender que los procedimientos serán orales, públicos, contradictorios, continuos, revestidos de inmediación, en el que la libertad probatoria no tendrá más límites que la ilegalidad de las pruebas y el sistema de valoración de la prueba será la sana crítica racional, lo que implica el deber de fundamentar las decisiones y dejar de manera expresa los fundamentos del voto disidente en caso existiera;



00000129

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- f) El Tribunal Conciliador y el Tribunal Arbitral de Derecho deberá estar integrado por tres árbitros, nombrados por las partes de conformidad al procedimiento que establece esta ley y sus decisiones o laudos se tomará por mayoría. Dos de los árbitros deberán necesariamente ser abogados, uno de ellos deberá presidir el Tribunal. El tercer árbitro podrá ser ingeniero o economista. Para elegir a los tres árbitros, debe respetarse las incompatibilidades, prohibiciones, obligación de excusas, recusaciones e inhibiciones que se contemplan en esta ley para otros funcionarios que integran el sistema de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica y las instituciones que la integran;
- g) La autoridad nominadora o la que haga las veces en la tramitación del Arbitraje por parte del Estado y su único responsable será la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, quien tendrá la delegación de la representación legal del Estado y de las funciones de consultoría y procuraduría. Para el efecto, el Procurador General de la Nación, deberá realizar de manera expresa tal delegación.

Artículo 103. Suspensión de Obras. Las partes podrán solicitar la suspensión de las obras, ante la Comisión Arbitral Adhoc o ante el Tribunal de Conciliación o Arbitraje de CIADI según sea el caso, fundamentando la necesidad de la petición.

Dicha solicitud se tramitará previo conocimiento de la Agencia y de la Institución Contratante del Estado y para decretarla deberán existir motivos graves y calificados.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 104. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación deberá delegar a la Agencia, la representación legal del Estado y su autorización para suscribir contratos bajo su estricta responsabilidad. Del mismo modo, la institución contratante del Estado, deberá requerir de la Procuraduría esa representación y la facultad para suscribir contratos en cada caso concreto, previo a solicitar a la Agencia que se evalúe un proyecto para poderlo realizar bajo la modalidad de contratación de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica.

Tanto la Agencia y sus autoridades, como la institución contratante del Estado, deberá informar a la Procuraduría General de la Nación, por cada gestión que realice en función de su delegación en consultoría, procuraduría y representación legal del Estado, de conformidad a lo que establece su ley.

Artículo 105. Derecho a Impugnar las resoluciones del Consejo que aprueben o imprueben la adjudicación de la licitación por parte de la Comisión de Evaluación. Las resoluciones que dicte el



00000130

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Consejo, a consecuencia de la interposición de un recurso de reconsideración en contra de las decisiones que aprueben o imprueben la adjudicación del proyecto realizada por la Comisión de Evaluación, pueden ser impugnadas a través del contencioso administrativo.

El contencioso administrativo podrá interponerse ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución que causa agravio al participante privado. Este Tribunal, tomando en cuenta la naturaleza del asunto y de manera fundada, podrá disponer la suspensión del acto administrativo.

- a) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberá inhibirse de conocer cualquier demanda que pretenda extender competencia a este Tribunal, que le es inherente a materia de conciliaciones y arbitraje;
- b) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sólo conocerá de los asuntos que le sean sometidos, en los que el Consejo haya emitido un acto de autoridad a consecuencia de la resolución de un recurso de reconsideración en contra de la resolución que aprueba o imprueba la adjudicación de la licitación, cuya resolución causa agravio al participante privado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Para tramitar el contencioso administrativo, regirán las normas establecidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, en esta materia se deberán reducir los plazos establecidos en dicha ley en dos terceras partes cada uno, para hacer expedito el procedimiento. El plazo de interposición de la demanda es de cinco días contados a partir de la notificación respectiva.

Los principios que deben regir el contencioso administrativo son oralidad, publicidad, contradicción, continuidad, revestido de inmediación y libertad probatoria.

Una vez interpuesto el contencioso administrativo, se tendrá por recibido el mismo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en resolución fundada se convocará a las partes, dentro de los diez días siguientes, a comparecer a juicio oral, público, contradictorio, continuo y revestido de inmediación, en donde las partes presentarán sus argumentos iniciales, ofrecerán de conformidad al principio de libertad probatoria todas las pruebas que consideren pertinentes. Los órganos de prueba serán recibidos previa agenda respetando el principio de continuidad, los que podrán relacionar objetos de prueba para ser introducidos al juicio. Con posterioridad a la reproducción de las pruebas, las partes emitirán argumentos finales y los miembros del tribunal valorarán la prueba de conformidad al sistema de la sana crítica racional, de viva voz antes de concluir el procedimiento, emitiendo la parte resolutive de su decisión.



00000131

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

La resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo será fundada y será entregada al día siguiente de haber emitido la parte resolutive correspondiente.

En contra de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no cabra recurso alguno.

Artículo 106. Plazos. Los plazos de días establecidos en esta ley, se entenderán como días corridos, salvo cuando la ley señale expresamente que el término deba contarse como días hábiles.

Las notificaciones se realizarán dentro de los plazos señalados y en caso que no se explicita plazo, debe entenderse que se realizarán dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución.

Para el efecto, todas las resoluciones y actos deben contar con fecha y hora.

Artículo 107. Reglamento. Dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Organismo Ejecutivo emitirá el Reglamento respectivo mediante Acuerdo Gubernativo.

Artículo 108. Establecimiento de la Agencia y Estructura Organizacional. Dentro del plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de esta ley, deberá establecerse la Agencia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y su estructura organizacional.

Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá identificar y asignar a la Agencia, el Presupuesto indispensable para su instalación y funcionamiento.

Artículo 109. Duración en el Cargo del Primer Director Ejecutivo y Director de Fiscalización. Excepcionalmente, tratándose del primer Director Ejecutivo y del primer Director de Fiscalización de la Agencia electos de conformidad con esta ley, durarán en sus cargos por un período de cinco años y podrán ser reelectos en los términos y condiciones previstos en ésta.

Artículo 110. Presupuesto. El presupuesto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año en que entre en vigencia, se financiará con cargo a reasignaciones presupuestarias del Fondo Común definido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Artículo 111. Ley Específica. En casos de controversias entre lo dispuesto entre otras leyes y la presente, siempre tendrá preeminencia ésta en su aplicación, por su carácter de ley específica en el sistema de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Artículo 112. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República y entrará en vigencia a los ocho (8) días de su publicación en el Diario Oficial.

~~PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.~~



00000132

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A
LOS ____ DIAS DEL MES DE ____ DE DOS MIL OCHO.